

Julio 25 de 1940

20ª REUNION — 16ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor **ROBUSTIANO PATRON COSTAS**,
Presidente provisional del Senado

Senadores presentes: Mario Arenas, Herminio Arrieta, Juan B. Castro, Raúl Ceballos Reyes, Alberto Francisco Figueroa, Francisco R. Galíndez, Manuel García Fernández, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Lucio López Peña, Juan José Lubary, José Heriberto Martínez, Alfredo L. Palacios, Robustiano Patrón Costas, Guillermo Rothe, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Gilberto Suárez Lago, José P. Tamborini.

Senadores ausentes, con aviso: Eduardo Laurencena, Jorge J. Pinto, Matías G. Sánchez Sorondo, Juan R. Vidal, Benjamín Villafañe.

Senadores ausentes, sin aviso: Alberto Arancibia Rodríguez, Ricardo Caballero, Aldo Cantoni, Juan Cepeda, Atanasio Eguiguren.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Comunicación de la Cámara de Diputados.

II.—Peticiones.

2.—Licencia.

3.—El senador Laurencena presenta la renuncia de miembro de la Comisión Investigadora de la adquisición de las tierras de El Palomar.

4.—Continúa la consideración, en particular, del despacho de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, en el proyecto de ley en revisión sobre colonización. Queda sancionado.

5.—Apéndice:

I.—Inserción solicitada por el senador Martínez

II.—Sanción del Honorable Senado en el proyecto de ley sobre colonización.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda abierta la sesión.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN:

Sobre adquisición de armamentos. (A las Comisiones de Guerra y Marina y de Presupuesto y Hacienda.)

II

Peticiones

La Unión Tranviarios solicita la sanción del proyecto de ley en revisión, que modifica el artículo 9º de la ley número 11.110. (A sus antecedentes.)

—En Buenos Aires, a los 25 días del mes de julio de 1940, siendo la hora 16, dice el:

La comisión que está terminando sus tareas, se verá privada por esa renuncia, al formular sus conclusiones, de la cooperación de un hombre eminente y honorable.

Sr. Suárez Lago. — Formulo moción para que se autorice al señor presidente, para designar el miembro reemplazante del doctor Laurencena en la comisión especial investigadora.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar la indicación formulada por el señor senador por Mendoza.

—Se vota y resulta afirmativa.

4

COLONIZACION

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Al orden del día.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

En la sesión anterior el Senado resolvió el aplazamiento del artículo 17 del despacho de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, a fin de que ésta pudiera estudiar una nueva redacción del mismo que había propuesto el señor senador Laurencena, cuya ausencia del recinto deploro.

La comisión, considerando que la redacción propuesta por el señor senador por Entre Ríos mejora y aclara la de nuestro artículo 17, sin afectar nada fundamental de las disposiciones que él contiene, lo va a aceptar con una ligerísima modificación, que consiste en no limitar exclusivamente a las provincias la aplicación de esas normas sino en disponer que la colonización se haga «preferentemente» para aquellas que ofrezcan esas ventajas para los agricultores, sin excluir por eso a aquellas provincias cuyos gobiernos, por incuria, por incomprensión o por cualquier otra causa, no hubieran sancionado iguales beneficios para los mismos. Las provincias también tendrían derecho a los beneficios del plan colonizador, aunque sujetándose a las preferencias que se crean para aquellas que dicten disposiciones que tiendan a eximir de impuestos al Consejo Agrario para los actos que realice, contratos que celebre, sellado en actuaciones judiciales o administrativas, inscripciones y actos complementarios; la exoneración de impuestos territoriales por los inmuebles que posea el consejo mientras permanezca en su po-

der; la exoneración de los impuestos territoriales por el término de cinco años, a los adquirentes de lotes agrícolas del consejo y a todos los agricultores que, con posterioridad a la ley respectiva, adquieran tierras en extensión no mayor de 100 hectáreas, que vivan en ellas con su familia y las cultiven por cuenta propia; y provean a la instalación de justicia de paz, policía y escuelas en las colonias, si no las hubiera en un radio menor de cinco kilómetros; como asimismo a la construcción y conservación de los caminos de acceso de las colonias a estación o puerto.

Voy a entregar a la Secretaría, pidiendo que se lea, la redacción propuesta por el señor senador por Entre Ríos, con las modificaciones con que la comisión la acepta, para pedir que se someta en esa forma al voto del Honorable Senador.

—Se lee:

Artículo 17. — El consejo colonizará preferentemente en las provincias que dicten leyes que dispongan:

- a) La exención de todo impuesto al consejo, por los actos que realice, contratos que celebre, sellado en actuaciones judiciales o administrativas, inscripciones y actos complementarios;
- b) La exoneración de impuestos territoriales por los inmuebles que posea el consejo, mientras permanezcan en su poder;
- c) La exoneración de los impuestos territoriales por el término de cinco años, a los adquirentes de lotes agrícolas del consejo y a todos los agricultores que, con posterioridad a la ley respectiva, adquieran tierras en extensión no mayor de 100 hectáreas, que vivan en ellas con su familia y las cultiven por cuenta propia;
- d) La instalación de justicia de paz, policía, y escuelas en las colonias si no las hubiera en un radio menor de cinco kilómetros;
- e) La construcción y conservación de los caminos de acceso de las colonias a estación o puerto.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — En consideración.

Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Correspondería ahora considerar el artículo nuevo que ha propuesto el señor senador por la Capital, doctor Palacios, cuya redacción entregó ayer a Secretaría y del que pido se dé lectura.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a dar lectura del artículo propuesto.

—Se lee:

El consejo queda facultado para entregar la tierra fiscal en concesiones vitalicias, de acuerdo a las normas que dictará oportunamente. Las concesiones serán intransferibles, de canon movable, sin admitir subarrendamiento. Los herederos podrán continuar los arriendos con preferencia respecto a terceros.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

La comisión ha prestado atención preferente a este nuevo artículo que propone el señor senador por la Capital y voy a dar en su nombre los motivos por los cuales, sin aceptarlo totalmente, recoge y acepta en apreciable medida los propósitos fundamentales que lo inspiran, expresando desde ya que la comisión no cree que ésta sea la ubicación que le corresponde, de tal manera que una vez sancionado, en una u otra forma, he de pedir al señor senador por la Capital y al Senado que lo ubiquemos en un capítulo posterior, que es donde correspondería, para no perturbar la secuela, conexión y ordenación del despacho en los artículos que vamos considerando.

Al informar en general, señor presidente, dije sintéticamente los motivos que la comisión tenía para aceptar y propiciar un plan colonizador en el país, que reconociera como bases esenciales la entrega de la tierra, parcelada y seleccionada, en propiedad definitiva, a los agricultores y también a título de arrendamiento por el breve plazo de cinco años, con opción de compra, como medio de llegar en seguida a aquel resultado.

Me referí también a la enfiteusis, institución que ha tenido su época y su historia conocida y que no corresponde, a mi juicio, al estado actual de nuestro derecho y de nuestras instituciones económicas y sociales. Tuvo su auge en la legislación romana y en la legislación hispanoamericana y tuvo también aplicación entre nosotros para solucionar problemas agrarios, en la ley de Rivadavia, de 1826, que también cité al informar en general.

Con posterioridad a esa época, en 1871, empezó a regir el Código Civil, que derogó y limitó todas las instituciones que creaban vinculaciones o situaciones patrimoniales llamadas a prolongarse por lapsos que él consideraba excesivos e inconvenientes para la disponibilidad de la propiedad y llamados a crear diversos inconvenientes de carácter económico y social. El artículo 2.614 del Código Civil suprimió la enfiteusis, los censos y las rentas, exceptuando para estas últimas aquellas que se celebrasen por menor plazo de cinco años. El artículo 2.115, rela-

tivo a la hipoteca, suprimió también las llamadas hipotecas legales, dejando sólo subsistente la hipoteca convencional, que, de acuerdo con el artículo 3.151, sólo puede durar diez años.

En materia de arrendamiento, el artículo 1.505 establece que no puede durar más de diez años el plazo y que en el caso de que se haga por más término caducará a los diez años. En materia de arrendamientos agrícolas, la ley número 11.170, muy posterior, por cierto, al crear lo que he llamado el plazo presunto, lo fija en cuatro años, creyendo que durante él puede desenvolverse por completo un ciclo agrario.

Es evidente que el Código Civil y la ley de arrendamientos agrícolas no se hicieron con vistas a colonizar o a poblar tierras fiscales y lejanas, que son a las que se refiere el artículo nuevo que propone el señor senador por la Capital.

He recordado estos antecedentes del derecho común, simplemente para señalar la tendencia que caracterizaba y distinguía a la legislación civil en ese momento de nuestra historia.

La comisión cree que pueden lograrse los objetivos fundamentales que se propone el señor senador por la Capital sin llegar a crear una verdadera *enfiteusis*, ni siquiera un arrendamiento a *perpetuidad* o *vitalicio*, haciendo así un arrendamiento por largo plazo, prorrogable indefinidamente por periodos bastantes largos también para que aseguren al poblador su radicación en la tierra; para que le permitan verla como algo propio; para que lo estimulen a dejar allí, con la seguridad del éxito, el fruto de su esfuerzo y su labor; a hacer mejoras con la certeza de que le serán debidamente compensadas y reembolsadas; y de que sus hijos encontrarán en la misma parcela la solución económica para su vida y para su porvenir.

La redacción que el señor senador por la Capital ha dado a su articulado era demasiado escueta. Yo comprendo que haya sido así, para dejar todo librado al Consejo Agrario Nacional, al cual se lo inviste de la facultad de otorgar arrendamientos en esas condiciones.

Pero la comisión cree que no puede dejarse todo librado al Consejo Agrario Nacional, y que aun admitiendo la conveniencia de esos arrendamientos largos para poblar esas tierras fiscales lejanas, es necesario crear, desde ya, ciertas normas que eviten toda posibilidad de abusos y arbitrariedades y que den a esta nueva institución las características esenciales que debe tener, sin perjuicio de la reglamentación de detalles que introduciría el Consejo Agrario Nacional.

Así, la comisión propone, después de ese arrendamiento a largo plazo, que puede ser hasta de veinte años, la posibilidad de su prórroga indefinida por períodos sucesivos de cinco años, mediante el pago de un alquiler o canon, fijo o movable, y de acuerdo con las condiciones que determinará la reglamentación del Consejo Agrario a dictarse con la aprobación del Poder Ejecutivo.

La comisión cree también que debe obligarse a los ocupantes o locatarios a vivir en la tierra y a trabajarla y que deben tener el derecho de poblarla e introducirle las mejoras necesarias y útiles a fin de que se sientan estimulados a hacerlas.

Cree finalmente la comisión que puede aceptarse el carácter de intransferible del arrendamiento, y que igualmente debe aceptarse la preferencia que se concede a los herederos, cuando se manifestaran dispuestos a continuar al mismo título la ocupación de esas tierras.

Todo esto está contenido en la redacción de un nuevo artículo, que dice así: «El Consejo Agrario Nacional, sin perjuicio de las demás disposiciones de la ley número 4.167, podrá dar en arrendamiento las tierras fiscales, que no entren en el plan de colonización regido por las disposiciones anteriores, por un plazo hasta de veinte años, que podrá prorrogar indefinidamente a solicitud del locatario, por períodos sucesivos de cinco años, por el precio fijo o movable y en las condiciones que determine la reglamentación que deberá dictar al efecto con la aprobación del Poder Ejecutivo. El locatario está obligado a vivir en la tierra arrendada y a trabajarla, y tendrá derecho para cobrar al final del contrato, las mejoras necesarias y útiles que hubiera realizado, siempre que aquél no termine por causa que le sea imputable. El contrato es intransferible, pero los herederos del locatario tendrán derecho preferente para ocupar la tierra al mismo título.»

En esa forma, la comisión cree que se contemplan, como he dicho, todos los propósitos esenciales que mueven al señor senador, sin incurrir en los inconvenientes de un arrendamiento a perpetuidad o vitalicio, y fijando, desde ya, en la ley algunas condiciones que a nuestro juicio, no pueden dejarse libradas a la simple reglamentación del Poder Ejecutivo, porque son de carácter esencial y conviene, por muchas razones, dejarlas desde ya consignadas en el texto de la ley.

Nada más, señor presidente.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

Lamento no estar de acuerdo con el señor senador miembro informante, en los fundamentos que ha expresado al entregar el artículo que va a discutirse y que modifica en parte, el que presenté ayer, aun cuando acepta los propósitos fundamentales.

En primer lugar, el señor senador hace una confusión que desearía no llegara al espíritu de los señores senadores. Ha expresado que la enfiteusis es un sistema anticuado, derogado por nuestra ley civil, y que ha tenido un gran auge en la legislación romana. No ha advertido el señor senador que la enfiteusis de nuestro gran Rivadavia, uno de los espíritus más esclarecidos de nuestro país, no era ni la enfiteusis romana ni la del medievo; era la enfiteusis argentina. Yo lo he sostenido en muchas oportunidades, en el libro, en la conferencia y en este mismo recinto, citando alguna vez las palabras de Nicolás Avellaneda, quien ha escrito un libro admirable sobre la ley de tierras, obra en la que se ha basado, en gran parte, el señor senador, al presentar, en un ilustrado discurso, los fundamentos de la ley de colonización que discutimos.

El sistema de Rivadavia, no era el romano ni el feudal. Los que tal lo juzgaron, engañados con el nombre, y sin penetrar en el fondo de las cosas, han incurrido en un error lamentable.

El sistema de Rivadavia no puede ser el sistema feudal ni el romano, porque estos dos se basan en la propiedad privada de la tierra, y la enfiteusis rivadaviana, el sistema argentino, se basaba en la propiedad del Estado.

Por otra parte, lo que yo propongo ahora, es una disposición facultativa, a objeto de que el consejo puede utilizar todas las formas posibles de colonización, sin verse obstaculizado en su desenvolvimiento. Las tierras de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y territorios nacionales, que no podrán entrar en el sistema, un tanto aristocrático, de colonización que propone el despacho, necesitarán del trabajo de los hombres desamparados de aquellas regiones, carentes en absoluto de recursos; y no sería justo que al Consejo Agrario se le privara de emplear esas tierras para entregarlas en concesiones vitalicias, no por un arriendo de quince o veinte años, como pretende el señor senador.

Es cierto, señor presidente, que la proposición que formulé ayer era un poco escueta, como ha expresado el señor miembro informante; pero lo era con el propósito de dar simplemente una autorización de carácter general, que debería sujetarse a las normas que habría de dictar el Con-

sejo Agrario. Pero debo recordar al señor senador que cuando pronuncié mi discurso, en la discusión en general, dí todas esas normas.

Las tierras rurales que se declaren inalienables, serían divididas en fracciones adecuadas a la ocupación de una familia agricultora y cedidas en condiciones de arriendo, mediante un canon anual y semestral que sería revaluado cada cuatro años, de acuerdo al precio promedio de los arriendos en dichos períodos en las zonas respectivas. En caso de que no se hubiera establecido dicho promedio todavía, el canon sería fijado por la Dirección de Tierras, en un porcentaje de la valuación fiscal a los efectos de la contribución directa.

Las concesiones serían vitalicias e intransferibles y de canon movable, pero los concesionarios podrían rescindir las en cualquier momento. En caso de fallecimiento del concesionario, sus herederos podrían continuar el arriendo, con preferencia respecto de terceros. No se admitirían subarriendos. El pago del canon sería semestral en las explotaciones granjeras, y anual en las de chacras, pagadero por períodos vencidos. Sería también a cargo del concesionario el canon de riego si ese servicio existiera o se estableciera.

Los concesionarios podrían efectuar mejoras que serían indemnizadas al terminar el contrato según su valor de tasación, de acuerdo a normas y tablas que se fijarían.

Todo esto entraba dentro del plan de las concesiones vitalicias. Pero mi propósito, al incorporar el artículo nuevo, era simplemente dar la estructura general, para que luego el Consejo Agrario, oportunamente, en los casos que creyera conveniente entregara las tierras, dictando las normas necesarias.

No es, señores senadores, un sistema anticuado, el que propongo; no es una hermosa reliquia histórica que debemos conservar en nuestros museos; se trata de un régimen que ha sido aceptado —yo he dicho alguna vez, copiado de Rivadavia— por uno de los grandes reformadores agrarios, el ministro Reeves, de Nueva Zelanda, que lo incorporó a la legislación de ese dominio británico, el más adelantado, en la misma forma en que yo acabo de proponerlo al Honorable Senado.

En el libro de Alberto Metin, sobre las evoluciones sociales en Australia y en Nueva Zelanda, se hacen consideraciones muy atinadas respecto de este régimen, que es la enfiteusis rivadaviana.

Conste que yo, por el temor de que mis palabras pudieran producir alguna confusión, ya

que la enfiteusis, aunque con otro carácter, había existido en Roma y en la Edad Media, me concreté en la sesión anterior a hablar de *concesiones vitalicias*.

Alberto Metin, en este libro que pongo a disposición de los señores senadores, habla del sistema de colonización de Nueva Zelanda, y dice que existen allí los tres sistemas. Primero, la locación con promesa de venta, como lo ha propuesto en un proyecto anterior el señor senador Laurencena; segundo, la venta pura y simple; y tercero, el arrendamiento perpetuo. Y hace notar el autor que en los años de 1899 a 1900, fueron entregados 111.108 acres en arrendamiento perpetuo, para 348 personas; 107.771 acres, un número menor, fueron entregados en arrendamiento con derecho a compra, para 393 personas; y la compra pura y simple, más onerosa, se realizó sólo por 95 personas y en 16.510 acres. Agrega que el arriendo enfiteutico está seriamente establecido en su país y que el propósito, el mismo que yo busco, es el de poder dar la tierra del Estado a gente que tiene capacidad para trabajarla, pero que carece en absoluto de recursos.

Acepto las modificaciones propuestas por el señor senador, que coinciden con las que yo he mencionado en mi discurso al tratarse en general la ley de colonización; pero insisto en que el arrendamiento ha de ser vitalicio.

De manera que pido al señor Presidente que tenga la gentileza de poner a votación, en primer término, la proposición sobre el carácter vitalicio de la concesión, y si fuera rechazado, la que se refiere al arriendo a veinte años prorrogable indefinidamente.

Sr. Landaburu. — Si me permite el señor senador, para facilitar la votación, ya que estamos de acuerdo en lo demás, podría votarse todo el texto, con excepción de la frase que se refiere al plazo.

Sr. Palacios. — No tengo inconveniente, señor senador, aun cuando me parece que lo que correspondería sería votar, primero, el arriendo vitalicio, pero acepto, pues deseo facilitar en toda forma la sanción de esta ley; insistiendo en esto, señor miembro informante: que con mi proposición no se establece un sistema determinado de colonización, sino que simplemente se establece una autorización para que el Consejo Agrario, cuando lo creyere conveniente y de acuerdo a normas que establecerá, con las tierras del Estado, haga arriendos vitalicios. Repito, que se trata de una simple autorización. Esto le dará a la ley mayor flexibilidad.

Naturalmente, que no hay motivos explicables para hacer una objeción al arriendo vitalicio, que se impondrá o no, de acuerdo con lo que resuelva un Consejo Agrario propuesto por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Honorable Senado.

Nada más.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a leer el artículo.

—Se lee:

Artículo 63. — El Consejo Agrario Nacional, sin perjuicio de las demás disposiciones de la ley número 4.167, podrá dar en arrendamiento las tierras fiscales que no entren en el plan de colonización regido por las disposiciones anteriores, por un plazo hasta de veinte años, que podrá prorrogar indefinidamente, a solicitud del locatario, por períodos sucesivos de cinco años, por el precio fijo o movable y en las condiciones que determine la reglamentación que deberá dictar al efecto con aprobación del Poder Ejecutivo. El locatario estará obligado a vivir en la tierra arrendada y a trabajarla, y tendrá derecho para cobrar al final del contrato las mejoras necesarias y útiles que hubiera realizado, siempre que aquél no termine por causa que le sea imputable. El contrato es intransferible, pero los herederos del locatario tendrán derecho preferente para ocupar la tierra al mismo título. El locatario sólo podrá ceder el arrendamiento, con previa autorización del Consejo Agrario.

Sr. Landaburu. — Se debe votar todo el texto menos lo que se refiere al plazo.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se votará todo, menos el plazo.

Sr. Palacios. — No, porque mi proposición es anterior. Lo que ha propuesto el señor senador es que se vote todo el texto del artículo menos lo que se refiere a cómo será el arriendo, si será por veinte años o si será vitalicio.

Sr. Landaburu. — Eso es; estamos de acuerdo.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a leer nuevamente todo el artículo, y a continuación se dirá qué es lo que no se va a votar.

—Se lee nuevamente.

Sr. Martínez. — ¿Que «podrá» prorrogar, o que «deberá» prorrogar? Porque son dos conceptos distintos.

Sr. Landaburu. — Que «podrá», dice el despacho.

Sr. Martínez. — Me gustaría más «deberá» prorrogar.

Sr. Palacios. — Permitame el señor senador. Lo que se va a votar ahora no es el plazo.

Sr. Martínez. — No me refiero al plazo, sino que, de la lectura, si no he escuchado mal, se infiere que el contrato de arriendo podrá ser prorrogado por el Consejo Agrario.

Sr. Landaburu. — A solicitud del locatario.

Sr. Martínez. — A solicitud; pero yo me inclinaría a una forma todavía más beneficiosa, estableciendo que «deberá prorrogar a solicitud del interesado, dentro de las condiciones», etcétera.

Sr. Palacios. — Pero en el caso de que sea vitalicio, no hay necesidad.

Por eso no vamos a discutir esto hasta no establecer si es vitalicio. Yo tengo prioridad en la votación.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el artículo con exclusión de los siguientes términos: «por un plazo hasta de 20 años».

Sr. Palacios. — Con exclusión del plazo.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Palacios. — Ahora, yo he propuesto que el arriendo sea «vitalicio». Eso es lo que debe votarse.

Sr. Landaburu. — Yo no tengo inconveniente en que se vote primero la proposición del señor senador por la Capital.

Sr. Palacios. — No es una galantería, sino que yo he hecho la proposición con anterioridad al señor senador.

Sr. Landaburu. — No hago cuestión.

Sr. Palacios. — Sería inexplicable.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Reglamentariamente entiendo que corresponde votar el despacho de la comisión.

Sr. Palacios. — No hay despacho. Se trata de una modificación del artículo que yo propuse.

Sr. Landaburu. — Prácticamente es lo mismo.

Sr. Palacios. — Ahora soy yo el que dice: No hago cuestión. (*Risas.*)

Sr. Presidente (Patrón Costas). — La comisión acepta que se vote el agregado tal cual lo ha propuesto el señor senador por la Capital.

Sr. Landaburu. — Es decir, que sea «vitalicio». ¿Cómo quedaría?

Sr. Palacios. — Ahora bastará votar «vitalicio».

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Landaburu. — Se podría leer para ver cómo ha quedado el artículo.

Julio 25 de 1940

CAMARA DE SENADORES

20ª Reunión. 16ª Sesión Ordinaria

—Se lee:

El Consejo Agrario Nacional, sin perjuicio de las demás disposiciones de la ley 4.167 podrá dar en concesiones vitalicias...

Sr. Landaburu. — El despacho ha dicho siempre «arrendamiento» y no «concesiones».

Sr. Martínez. — Pido que se reconsidere la votación para proponer la palabra «concesión vitalicia» que se ajusta más al sentido jurídico.

Sr. Serrey. — Es mejor usar la palabra arrendamiento que concesión, ya que él expresa que ha de ser a título oneroso lo que no ocurre con la concesión.

Sr. Palacios. — Si se habla del canon, no puede ser gratuito.

Sr. Landaburu. — Entiendo que el señor senador por la Capital acepta que se diga «arrendamiento vitalicio».

Sr. Palacios. — Si, señor, pero no por las razones que da el señor senador por Salta de que uno es oneroso y otro gratuito. Considero que está mejor dicho «concesiones vitalicias», pero no le atribuya mucha importancia a la modificación.

Sr. Martínez. — Sin atribuir tampoco mayor importancia a la modificación, pero para mejorar el texto de la ley, conservando el espíritu con que ha sido votado, insisto en que se modifique la palabra «arrendamiento» por la de «concesión».

Sr. Presidente (Patrón Costas) — Se va a dar lectura del texto tal cual ha quedado.

—Se lee:

El Consejo Agrario Nacional, sin perjuicio de las demás disposiciones de la ley número 4.167, podrá dar en arrendamiento vitalicio las tierras fiscales, que no entren en el plan de colonización regido por las disposiciones anteriores, por el precio fijo o movable y en las condiciones que determine la reglamentación que deberá dictar al efecto con aprobación del Poder Ejecutivo. El locatario estará obligado a vivir en la tierra arrendada y a trabajarla y tendrá derecho para cobrar al final del contrato las mejoras necesarias y útiles que hubiera realizado, siempre que aquél no termine por causa que le sea imputable. El contrato es intransferible, pero los herederos del locatario tendrán derecho preferente para ocupar la tierra al mismo título. El locatario sólo podrá ceder el arrendamiento, con previa autorización del Consejo Agrario.

Sr. Martínez. — Insisto, señor presidente, que se reconsidere la votación, para proponer la substitución de la palabra «arrendamiento» por la de «concesión».

Sr. Landaburu. — Permítame. Yo creo que el señor senador está improvisando en este momento. El texto se ha votado ya. En diversos pasajes se encuentra la palabra locador, locatario; esa es la terminología de todo el texto de la ley. Si el señor senador está de acuerdo en que arrendamiento significa lo mismo que concesión, ¿por qué insiste en que se vote la palabra arrendamiento, si después habla de locatario y de locador? ¿Eso sólo se concibe cuando hay contrato de arrendamiento?

Sr. Martínez. — Por esta sencilla razón; porque considero que sería más ajustada a nuestra técnica jurídica la palabra «concesión» que la palabra «arrendamiento».

Sr. Presidente (Patrón Costas). — ¿Insiste el señor senador en su moción de reconsideración?

Sr. Martínez. — No insisto, señor presidente; pero no dudo que han de llegar las críticas a la palabra «arrendamiento» y de esta manera queda salvada mi opinión.

Sr. Palacios. — Es indudable que corresponde a la palabra «concesión». Pero deje el señor senador que cargue con la responsabilidad gramatical quien no la acepta.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — ¿Dónde corresponde colocar este artículo?

Sr. Landaburu. — La comisión cree que debe ir en el capítulo XIX «Disposiciones generales», como artículo 63.

—Se leen los siguientes artículos:

Artículo 32. — Los agricultores que al término del contrato de arrendamiento hayan cumplido con las obligaciones impuestas por aquél y los requisitos prescritos por esta ley, podrán adquirir el predio que trabajan, siempre que en el acto de subscribir los boletos de compraventa, abonen el 10 % del precio de venta.

En caso de que el arrendatario al final de su contrato optare por no adquirir el terreno arrendado, el fondo de ahorro a que se refiere el artículo 38, quedará como recurso del Consejo Agrario.

Art. 33. — Los compradores que no hayan pagado todo el precio o transferido el saldo de la deuda del Banco Hipotecario Nacional, no podrán enajenar sus derechos al predio sin previo consentimiento del consejo y aceptación por éste del nuevo adquirente. Los arrendatarios con opción de compra tampoco podrán, sin igual requisito, ceder sus arrendamientos o subarrendar. El consejo deberá pronunciarse dentro de treinta días de formulado el pedido correspondiente.

Toda enajenación del predio o cesión o subarriendo hecho sin consentimiento del consejo, es nulo de pleno derecho.

Art. 34. — En cada inmueble que se subdivida en más de treinta parcelas, se formará una explotación con orientación, individualidad y organización propias, con miras a la diversificación de la producción

y a la implantación de industrias rurales anexas. Tendrá un consejo de agrarios, un director técnico designado por el consejo nacional y una reserva fiscal para la instalación de chacras experimentales, estaciones zootécnicas, etcétera.

El consejo estimulará y fomentará especialmente en cada colonia, la constitución y funcionamiento de sociedades cooperativas agrarias de producción, de consumo, de comercialización y de industrialización, a cuyo efecto mantendrá servicios gratuitos de información y de gestiones ante las autoridades que correspondan para su reconocimiento. Además gestionará la instalación de escuelas primarias y de finalidad agrarista, las que serán orientadas hacia una enseñanza que se adapte al medio rural y costeadas por el Consejo Nacional de Educación, pudiendo, a los fines de la misma, recabar la colaboración de los técnicos del Ministerio de Agricultura o hacerlo por intermedio de los que tuviere en las colonias.

—Se aprueban, sin observación.

—Se lee:

Artículo 35. — Los agrarios, mientras no sean propietarios, estarán obligados a seguir las normas de cultivo y explotación que les sean indicadas por el consejo o sus representantes especialmente autorizados.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — En consideración.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

En la sanción de la Cámara de Diputados se ha deslizado un error que nosotros hemos mantenido en el despacho; donde dice «los agrarios, mientras no sean propietarios», quiere decir mientras no hayan pagado todo el precio, porque propietarios son desde el día en que se firma el contrato, aunque deban todo el precio. De manera que deben substituirse las palabras «sean propietarios» por las siguientes: «hayan pagado todo el precio»:

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a leer el artículo con la modificación propuesta por el señor senador.

—Se lee:

Artículo 35. — Los agrarios, mientras no hayan pagado todo el precio, estarán obligados a seguir las normas de cultivo y explotación que les sean indicadas por el consejo o sus representantes especialmente autorizados.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen los siguientes artículos:

Artículo 36. — El Consejo Agrario Nacional procederá a instituir en las colonias oficiales y en las distintas zonas del país, donde sea necesario y en el número

que juzgue preciso para orientar las explotaciones agrarias, racionalizar la producción y tutelar los intereses de los trabajadores agrarios, consejos agrarios que estarán formados por tres miembros que desempeñarán sus cargos ad honórem.

Los miembros de los consejos agrarios serán elegidos por el Consejo Agrario Nacional, entre los mejores productores de la zona en que se creen, ejerciendo la presidencia el gerente del Banco de la Nación, el agrónomo regional o el presidente de la cooperativa, en caso de existir en la zona donde se establezcan, o en su defecto el productor que el Consejo Agrario Nacional determine.

Art. 37. — Los consejos agrarios tendrán las siguientes funciones:

- 1ª Coadyuvar con la acción del Ministerio de Agricultura en todo lo relativo a la orientación y racionalización de la producción ganadera y agrícola, a la sanidad vegetal y a la organización de la industrialización y del comercio de los productos agropecuarios;
- 2ª Colaborar en la forma que reglamentará el Consejo Agrario Nacional, con éste, en la acción que debe desarrollar para la ejecución de la presente ley y de la reglamentación de la misma;
- 3ª Colaborar con la Sección de Crédito Agrario del Banco de la Nación Argentina para facilitar la canalización del crédito agrario a los pequeños agricultores y ganaderos;
- 4ª Actuar como delegados del Ministerio de Agricultura en la acción que éste desarrolla para combatir y extinguir las distintas plagas de la agricultura;
- 5ª Intervenir en calidad de amigables componedores en los conflictos que se suscitaren con motivo del trabajo de los productores agropecuarios y representarlos en sus gestiones ante el Ministerio de Agricultura y los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales;
- 6ª Fomentar con una propaganda permanente y eficaz la organización de cooperativas de producción, de comercialización y de consumo.

CAPÍTULO XII

Fondos de ahorro

Artículo 38. — Todo comprador, después de abonar el interés por el saldo de precio y su amortización, de acuerdo con el artículo 29, y todo arrendatario después de abonar el precio de su arrendamiento, de conformidad con el artículo 31, deberá abonar, además, una suma variable, para constituir el fondo de ahorro, cuyo monto anualmente no podrá exceder del 4 % del precio de venta.

Art. 39. — El consejo fijará anualmente y en cada región, el monto de las sumas que los propietarios o arrendatarios deberán ingresar en el fondo de ahorro. Si los resultados de la explotación anual del predio no permitieran, a juicio del consejo el cobro de esas sumas, podrá exonerarlos de su pago.

Art. 40. — Las sumas que se abonen en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 se depositarán en el Banco de la Nación Argentina a nombre del compra-

Julio 25 de 1940

CAMARA DE SENADORES

20ª Reunión. 16ª Sesión Ordinaria

dor o arrendatario y a la orden del consejo, colocadas en títulos nacionales. Los intereses de estas sumas tendrán el mismo destino.

Art. 41. — El fondo de ahorro, se destinará para:

- a) Aumentar el fondo de amortización para saldar el precio del predio adquirido, en la forma que el consejo determine;
- b) Reunir la cantidad necesaria para adquirir el predio arrendado;
- c) Servir como fondo de reserva para las contingencias agrícolas, mientras no se haya instituido el seguro agrario.

Solamente cuando el fondo de ahorro, alcance al 10 % de precio de venta, el excedente se destinará a amortizar su saldo.

—Se aprueban, sin observación.

—Se lee:

Art. 42. — Si el agricultor no pudiese abonar el saldo del precio en las condiciones establecidas e invocare el caso de fuerza mayor, como causa de pérdida de sus cosechas, el consejo podrá hacer uso de las sumas destinadas a fondo de ahorro, para el pago de las anualidades a que se refiere el artículo número 29.

El consejo, por unanimidad, podrá suspender transitoriamente el pago total o parcial de los servicios de amortización e intereses de la deuda contraída por los compradores de predios, así como la proveniente por precio de arrendamiento, teniendo en cuenta los antecedentes de cada caso y siempre que no haya saldo disponible en el fondo de ahorro.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

Propongo a la comisión que después de la palabra «precio», se agreguen las palabras «de venta o de arrendamiento».

Sr. Landaburu. — La comisión entiende que están contemplados los dos casos, pero no hay inconveniente en aceptar la proposición del señor senador por la Capital.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el despacho de la comisión con la modificación propuesta por el señor senador por la Capital y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen los siguientes artículos:

Artículo 43. — Una vez efectuada la transferencia a que se refiere el artículo 30, cesará la obligación del comprador de contribuir a formar el fondo de ahorro.

CAPÍTULO XIII

Rescisión de contrato

Art. 44. — Todo contrato podrá ser rescindido si el agricultor:

- a) No reside en el predio con su familia y no lo trabaja;

b) Deja de pagar una anualidad parcial o totalmente, siempre que esa falta de pago no fuera imputable, a juicio del consejo, a causa de fuerza mayor;

c) No cumpla con cualquiera de las otras disposiciones de esta ley, o del contrato de compraventa, o de arrendamiento con opción de compra.

Art. 45. — Siempre que no sea por falta de pago, toda resolución del consejo que declare rescindido un contrato, deberá ser adoptada por lo menos por cuatro de sus miembros y comunicada en la época que determine el contrato; la notificación se hará por intermedio del juez de paz del lugar. El comprador tendrá un plazo mínimo de seis meses para desalojar, y el arrendamiento un plazo mínimo de sesenta días, previo informe del consejo local.

Art. 46. — Queda facultado el consejo a proceder sin forma alguna de juicio, al embargo hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio para aplicarla al pago de las anualidades a que se refieren los artículos 29 y 31. Los embargos se anotarán en el Registro Agrícola Ganadero de la Nación (ley número 9.644).

—Se aprueban, sin observación.

—Se lee:

Artículo 47. — Queda facultado el consejo a rescindir el contrato de compraventa, si el comprador no hubiese abonado las anualidades a que se refiere el artículo 29.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

A mí me parece que este artículo dice lo mismo que el inciso b) del artículo 44. El inciso expresa que se rescindirá el contrato si «deja de pagar una anualidad parcial o totalmente, siempre que esa falta de pago no fuera imputable, a juicio del consejo, a causa de fuerza mayor», y este artículo 47 dice: «Queda facultado el consejo a rescindir el contrato de compraventa, si el comprador no hubiese abonado las anualidades a que se refiere el artículo 29».

Sr. Landaburu. — ¿De modo que el señor senador sugiere la conveniencia de suprimir este artículo 47?

Sr. Palacios. — Sí, señor senador, porque es inútil.

Sr. Landaburu. — La comisión acepta, porque entiende que está dicho lo mismo, aunque en otros términos, en el inciso b) del artículo 44.

Sr. Palacios. — En este artículo 47 está dicho en peores términos lo que dice el inciso b) del artículo 44.

Sr. Landaburu. — La comisión acepta la supresión del artículo 47.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda suprimido el artículo 47 del despacho de la comisión.

—Se leen los siguientes artículos:

Artículo 48. — En caso de fallecimiento del comprador, el consejo podrá hacer uso del derecho de rescisión, y ceder nuevamente el predio a alguno de los herederos que considere capaz de continuar la explotación agraria, o a un tercero si no hubiere herederos en esas condiciones. En este caso, depositará a la orden del juez y a nombre de la sucesión, el monto de las amortizaciones y el valor estimado de las mejoras, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

Art. 49. — En caso de fallecimiento del arrendatario con opción de compra, queda facultado el consejo para rescindir el contrato. Para una nueva adquisición del predio, deberá preferir a la viuda del locatario o a uno de sus hijos mayor de edad. Declarada la caducidad de la promesa de venta por fallecimiento y no adjudicado el predio a un heredero, el consejo fijará una indemnización por las mejoras efectuadas, de acuerdo a lo dispuesto por esta ley, cuyo importe depositará a la orden de la sucesión respectiva.

CAPÍTULO XIV

Indemnización de mejoras

Art. 50. — El consejo al declarar rescindido el contrato devolverá lo amortizado, deduciendo lo necesario a fin de que resulte abonado el 3 % del valor de la venta como arriendo anual durante el tiempo que ocupó el lote, e indemnizará las mejoras en el estado en que se encuentren al recibir la posesión del predio, siempre que no haya sufrido deterioro imputable al agricultor con motivo del desalojo.

Art. 51. — El justiprecio de las mejoras y el monto de la indemnización serán fijados por el consejo, previo asesoramiento del Consejo Agrario local y audiencia del interesado.

CAPÍTULO XV

(Nuevo)

Colonización granjera

Art. 52. — El Consejo Agrario Nacional estudiará e implantará en las regiones del país que crea conveniente, un plan de colonización granjera, de tipo familiar.

Art. 53. — Las tierras para colonización granjera se dividirán y venderán en parcelas no mayores de cincuenta hectáreas y se destinarán, además de los distintos cultivos y cuidado de animales de labor, a avicultura, apicultura, cría de conejos, cerdos, mantenimiento de vacas lecheras y demás industrias granjeras y transformadoras de sus productos.

Art. 54. — Cuando exista un número suficiente de explotaciones granjeras, a juicio del Consejo Agrario Nacional, se constituirán consejos granjeros locales, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo XI de esta ley; y cuando a juicio del Ministerio de Agricultura, hubiera en el país un número suficiente de consejos granjeros locales, éstos tendrán los mismos derechos que los consejos agrarios para estar representados e integrar, indistintamente, el Consejo Agrario Nacional.

En todo lo demás la colonización granjera se regirá por las prescripciones de esta ley sobre colonización agrícola.

—Se aprueban, sin observación.

—Se lee:

CAPÍTULO XVI

Explotación agraria suburbana

Art. 55. — El Consejo Agrario Nacional propenderá al parcelamiento y formación de pequeñas explotaciones agrarias intensivas en los ejidos de las ciudades y villas, conviniendo con las respectivas comunas la forma de realizar la tarea.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Propongo que el título de este capítulo XVI, en lugar de decir «Explotación agraria suburbana», diga «Colonización ejidal».

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el artículo 55, con la modificación del título del capítulo, que ha propuesto el señor senador por San Luis.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen los siguientes artículos:

Artículo 56. — Las explotaciones ejidales se ajustarán a las normas generales establecidas para las rurales, debiéndose tender a formar especialmente pequeñas quintas y granjas. En cada ejido con más de treinta parcelas se organizará una cooperativa y un consejo agrario.

Art. 57. — En tierras cercanas a las ciudades, el consejo propenderá especialmente a la formación de colonias de tamberos, con la organización establecida en la presente ley.

CAPÍTULO XVII

Colonización privada

Art. 58. — Los propietarios que destinen inmuebles a la colonización y acepten las normas que dicte el consejo con aprobación del Poder Ejecutivo, quedan eximidos por el término de cinco años y por la extensión colonizada, del impuesto territorial desde la fecha en que se extiendan a favor de los colonos respectivos, contratos de venta. Quedan, también, exentos de todo impuesto de sellado y derecho de inscripción.

Art. 59. — El consejo gestionará de los gobiernos de provincia la exención del impuesto territorial para los inmuebles a que se refiere el artículo anterior.

—Se aprueban, sin observación.

—Se lee:

Art. 60. — El Consejo Agrario Nacional podrá aceptar inmuebles privador que encuadren dentro de las condiciones que esta ley establece, para colonizarlos

dentro de las normas de la misma, cobrando únicamente los gastos que por tal concepto se realicen y acreditando los créditos que por ese hecho resultaren.

El consejo inspeccionará las colonias particulares del país, sean de propietarios o arrendatarios, fomentando la buena colonización y difundiendo la cultura agraria en todos sus aspectos.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra, para proponer que se depure el despacho de un error que tiene este artículo 60; donde dice «acreditando los créditos», deberá decir «acreditando los beneficios».

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a leer el artículo con la modificación propuesta por el señor miembro informante de la comisión.

—Se lee:

Artículo 60. — El Consejo Agrario Nacional podrá aceptar inmuebles privador que encuadren dentro de las condiciones que esta ley establece, para colonizarlos dentro de las normas de la misma, cobrando únicamente los gastos que por tal concepto se realicen y acreditando los beneficios que por ese hecho resultaren.

El consejo inspeccionará las colonias particulares del país, sean de propietarios o arrendatarios, fomentando la buena colonización y difundiendo la cultura agraria en todos sus aspectos.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

CAPÍTULO XVIII

Recursos del consejo

Art. 61. — El Consejo Agrario Nacional dispondrá de los siguientes recursos:

- a) Hasta la cantidad de \$ 30.000.000 m/n., que el Poder Ejecutivo entregará con imputación a esta ley, dentro de los noventa días de promulgada, provenientes de rentas generales o del fondo de beneficios de cambio, o de una operación de crédito interno o externo, pudiendo usarse de los tres medios a la vez;
- b) Hasta la cantidad de \$ 70.000.000 m/n., que el Poder Ejecutivo desde el año siguiente a la promulgación de esta ley entregará anualmente en cuotas de pesos 10.000.000 m/n., o su equivalente en títulos externos o internos;
- c) El producido de la venta y arrendamientos de las tierras regidas por la presente ley;
- d) Los fondos que se recauden en virtud de lo dispuesto por las leyes números 4.167, 5.559 y 6.712 y sus reglamentaciones vigentes;
- e) El producido de las comisiones, de los intereses punitivos, derechos de inspección, etcétera, que fije el consejo, y que los legados, donaciones, etcétera, que se le hagan. Estos

fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina a la orden del consejo.

—Se aprueba, sin observación.

Sr. Landaburu. — Correspondería ubicar aquí, después del artículo 61, porque constituye un recurso para el consejo, el artículo que ha sugerido el señor senador por la Capital, relativo a la posibilidad de pagar el impuesto hereditario en tierras. Ya me he referido antes a este asunto y seré ahora muy breve.

La comisión acepta, en términos generales, la proposición del señor senador por la Capital. El artículo pertinente sería redactado en la siguiente forma y llevaría el número 62, estando, por consecuencia, incluido en el capítulo de los recursos: «El Consejo Agrario Nacional, a solicitud del interesado, recibirá en pago del impuesto hereditario sobre bienes de jurisdicción nacional, que en ese caso se declaran fondos de colonización, tierras que reúnan las condiciones del artículo 99, siempre que la porción o lote exceda de quinientas hectáreas y se entregue por la valuación fiscal para el pago del impuesto territorial».

Sr. Palacios. — Estoy de acuerdo, señor senador, pero se podría substituir las palabras «a solicitud», por «siempre que no se opusiera el interesado».

Sr. Landaburu. — Me parece que es el interesado el que debe gestionar ante el consejo.

Sr. Palacios. — Pero como hay interés en que esas tierras entren al fondo de colonización, sería interesante no dificultar el ingreso.

Sr. Landaburu. — Vamos a llegar prácticamente a lo mismo, porque para cerciorarse de eso, el consejo tendría que indagar y preguntar. Como las sucesiones demoran mucho, tienen tiempo los interesados para hacer la gestión pertinente.

Sr. Palacios. — Sugiero la posibilidad de una gestión del Consejo Agrario en la sucesión.

Sr. Landaburu. — La gestión debe ser completa, señor senador; el interesado debe concurrir al consejo ofreciendo en pago del impuesto hereditario esas tierras, mencionando su ubicación, su superficie, los títulos en virtud de los cuales se demuestre que pertenecen a la masa hereditaria, para que el consejo esté seguro que lo que se le entrega pertenece al acervo del causante. Tiene que llenar un pequeño trámite que es esencial; y como es una facilidad para el interesado, lo menos que se puede hacer es pedirle que haga una solicitud.

Sr. Palacios. — Yo deseaba facilitar ese trámite en beneficio del Consejo Agrario.

Sr. Landaburu. — No siempre el consejo estará informado de que en la sucesión tal, que se tramita en tal parte, hay tierras en condiciones colonizables que le pueden ser entregadas en pago del impuesto hereditario.

Sr. Palacios. — No quiero hacer polémica; si no acepta el señor senador, que se vote como él lo propone.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a leer el artículo nuevo.

—Se lee:

Artículo 62. — El Consejo Agrario Nacional, a solitud del interesado, recibirá en pago del impuesto hereditario sobre bienes de jurisdicción nacional, que en ese caso se declaran fondos de colonización, tierras que reúnan las condiciones del artículo 9º, siempre que la porción o lote exceda de quinientas hectáreas y se entregue por la valuación fiscal para el pago del impuesto territorial.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Palacios. — Me felicito de que la comisión haya aceptado mi proposición, que conceptúo fundamental.

—Se lee el artículo 62 del despacho:

Mientras no se empleen en los destinos previstos por esta ley, los recursos a que se refiere el artículo anterior, el consejo podrá invertirlos hasta un 90 % en títulos nacionales. Los intereses que devenguen estos títulos formarán parte de los recursos del consejo.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 63 del despacho:

Las tierras situadas en las fronteras del país, se destinarán a la formación de colonias agrarias, pobladas con familias de ciudadanos nativos. A este efecto decláranse de utilidad pública las que se encuentren en poder de particulares, las provincias o municipalidades.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

El artículo 63 se refiere a formación de colonias agrarias pobladas por familias de ciudadanos nativos, en las tierras situadas en las fronteras del país.

Por decreto del Poder Ejecutivo del año 1935 ya se prohibió a la Dirección de Tierras vender tierras en la frontera a ciudadanos extranjeros, ni acepta la transferencia de propiedades a éstos.

Me parece muy bien la disposición proyectada en el artículo 63, pero creo que sería necesario complementarla, tomando en parte las disposiciones del reglamento de la Dirección General de Tierras, que establece una determinada faja, según sean los territorios. En Misiones, por ejemplo, la faja es sólo de 20 kilómetros mientras que en los territorios del Sur es de 50 kilómetros.

Yo propondría entonces, señor presidente, que el artículo se redactara en la siguiente forma: «Las tierras situadas en las fronteras del país y que comprendan una faja de 20 a 100 kilómetros, según su ubicación o territorio, se destinarán a la formación de colonias agrarias pobladas con familias de ciudadanos nativos.»

Es decir, que con ello quiero precisar bien que las tierras comprendidas en esas zonas sólo pueden ser vendidas a ciudadanos nativos. Al mismo tiempo, como para la adjudicación de estas tierras se necesita que estos ciudadanos reúnan condiciones especiales, dado que ellas pueden estar vinculadas a la defensa del país, proyecto en el segundo apartado del mismo artículo, después de las palabras: «...las provincias o municipalidades», agregar: «...Al efectuar las adjudicaciones de estas tierras, el Consejo Agrario Nacional deberá proceder de acuerdo con el Ministerio de Guerra.»

Creo, señor presidente, que la Comisión de Agricultura no ha de tener inconveniente en aceptar estas dos modificaciones, que, a mi juicio, complementan y precisan el pensamiento de la misma al redactar el artículo 63.

Sr. Landaburu. — La comisión acepta, en principio, la modificación propuesta por el señor senador por Córdoba, aunque cree que podría caber una redacción que aclarase y mejorase la misma.

Podría el señor secretario dar lectura del artículo con la modificación propuesta.

—Se lee:

Las tierras situadas en las fronteras del país y que comprendan una faja de 20 a 100 kilómetros, según su ubicación y territorio, se destinarán a la formación de colonias agrarias pobladas con familias de ciudadanos nativos. A este efecto decláranse de utilidad pública las que se encuentren en poder de particulares, las provincias o municipalidades. Al efectuar las adjudicaciones de estas tierras, el Consejo Agrario Nacional deberá proceder de acuerdo con el Ministerio de Guerra.

Sr. Landaburu. — Acabamos de ponernos de acuerdo con el señor senador por Córdoba en la primera parte de su proposición, que podría decir: «...y que estén comprendidas,» en lu-

gar de «...que comprendan,» y en lugar de «...una faja de 20 a 100 kilómetros,» decir: «...en una faja de 20 a 150 kilómetros de la línea internacional.» Lo restante del artículo, en la forma que ha propuesto el señor senador por Córdoba.

Sr. Martínez. — Exactamente; y podría eliminarse la conjunción «y».

Sr. Landaburu. — Muy bien.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se dará lectura, por Secretaría, de la forma en que quedará redactado el artículo.

—Se lee:

Artículo 63. — Las tierras situadas en las fronteras del país, comprendidas en una faja de 20 a 150 kilómetros de la línea internacional, según su ubicación y territorio, se destinarán a la formación de colonias agrarias pobladas con familias de ciudadanos nativos. A este efecto decláranse de utilidad pública las que se encuentren en poder de particulares, las provincias o municipalidades. Al efectuar las adjudicaciones de estas tierras, el Consejo Agrario Nacional deberá proceder de acuerdo con el Ministerio de Guerra.

Sr. Landaburu. — Propongo que se vote por partes, señor presidente.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Habiendo asentimiento, se va a votar el primer apartado del artículo, hasta las palabras «ciudadanos nativos».

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Landaburu. — La comisión pide al señor senador por Córdoba que acepte, en lugar de decir «procederá de acuerdo con el Ministerio de Guerra», «previo informe del Ministerio de Guerra».

Sr. Martínez. — Acepto, señor senador.

Sr. Arrieta. — Yo desearía, señor presidente, se me aclarara un punto que no alcanzo a comprender.

Las colonias, según la redacción que acaba de votarse, deberán establecerse en la faja comprendida entre los 20 y los 150 kilómetros contados a partir de la línea internacional. Y yo pregunto: ¿en la faja comprendida entre la línea internacional y los 20 kilómetros, no se podrán establecer colonias?

Sr. Martínez. — Permítame, señor senador.

El artículo comienza por decir: «Las tierras situadas en la frontera». Lo único que pretende el artículo es evitar que haya colonias pobladas

por extranjeros propietarios de esas tierras, situadas en la frontera.

El artículo 63 hacía la declaración, pero no la precisaba bien; entonces, mi proposición tiende a definir cuál es el radio dentro del cual no puede haber tierras sino pobladas por argentinos nativos. Por eso es que se agrega la expresión «que estén comprendidas dentro de los 20 kilómetros o de los 150 kilómetros».

La distancia es variable porque depende según las características de los territorios y las provincias. Por ejemplo, en los territorios llanos, como el de Misiones, prácticamente basta con 20 kilómetros, lo mismo que en Chaco y Formosa; en cambio, en las zonas montañosas es necesario una mayor extensión, y por eso se va hasta 150 kilómetros.

Esto, en realidad, es darle fuerza legislativa a decretos del Poder Ejecutivo, a que me he referido, dictados por la presidencia de Justo, siendo ministro el ingeniero Duhau, que impartía estas instrucciones a la Dirección de Tierras.

La segunda parte de la proposición está vinculada a la intervención del Ministerio de Guerra respecto de la adjudicación de estos lotes, porque es necesario conocer los antecedentes y demás circunstancias de las personas a las cuales se les adjudicará estas tierras, a pesar de ser ciudadanos nativos.

Sr. Arrieta. — Yo comparto el concepto que expresa el señor senador por Córdoba. Lo que dudo es que la redacción que se ha dado al artículo lo exprese así.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Hago notar al señor senador que ha sido ya aprobado.

Sr. Arrieta. — Por eso voy a pedir la reconsideración.

Sr. Landaburu. — Está perfectamente claro.

Sr. Arrieta. — Yo le pregunto al señor miembro informante de la comisión qué clase de colonias se podrán establecer entre la línea internacional y la línea que diste de ella 20 kilómetros.

Si el señor secretario quisiera tener la bondad de leer el párrafo ya votado...

—Se lee:

Las tierras situadas en las fronteras del país, comprendidas en una faja de 20 a 150 kilómetros de la línea internacional, según su ubicación y territorio, se destinarán a la formación de colonias agrarias pobladas con familias de ciudadanos nativos.

Sr. Arrieta. — Debería decir, dentro del concepto expresado por el señor senador por Córdoba y por el señor miembro informante: «Las tierras comprendidas en las fronteras del país

hasta una distancia de 150 kilómetros de la línea internacional...

Hago, pues, la moción de reconsideración a fin de que podamos darle a este artículo la redacción conveniente dentro del concepto expresado por los señores senadores.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor senador por Jujuy.

Sr. Landaburu. — Yo ruego al señor senador que desista de la moción de reconsideración porque la redacción de la primera parte es perfectamente clara. El señor senador por Córdoba limita y precisa el alcance del artículo 63 relativo a colonizaciones fronterizas, asunto sobre el cual hay proyectos especiales a los que me he referido al informar en general. Se quiere que esa colonización, típicamente fronteriza, por ciudadanos nativos, esté radicada en la zona a que el señor senador se ha referido, en la faja de tierra cuyo ancho es de 20 a 150 kilómetros desde la línea internacional, para adentro del territorio argentino. Creo que no hay nada que aclarar.

Sr. Martínez. — Por eso dice «comprendidas».

Sr. Presidente (Patrón Costas). — ¿Insiste en su moción el señor senador por Jujuy?

Sr. Arrieta. — Si el señor miembro informante cree que la redacción que tiene el artículo expresa lo que él dice, yo retiro mi moción de reconsideración.

—Se lee la segunda parte del artículo, que dice así:

A este efecto decláranse de utilidad pública las que se encuentren en poder de particulares, las provincias o municipalidades. Al efectuar las adjudicaciones de estas tierras, el Consejo Agrario Nacional deberá proceder previo informe al Ministerio de Guerra.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen los siguientes artículos:

Artículo 64. — Los colonos a que se refieren los artículos 45, 51, 52 y 53 de la ley número 12.367, tendrán derecho a los beneficios que se otorgan en esta ley a los arrendatarios o compradores de predios, quedando bajo el contralor del Consejo Agrario, conforme a la reglamentación que dicte de acuerdo con la Dirección General de Gendarmería Nacional. Las colonias serán organizadas con sujeción a las bases de esta ley.

Art. 65. — El Consejo Agrario acordará tierras en propiedad, en los territorios nacionales, a los indígenas del país y establecerá el régimen de explotación de las mismas, teniendo en cuenta sus costumbres y métodos de trabajo. Las tierras que se les adjudique no podrán ser vendidas, gravadas, ni embargadas, sin el consentimiento del Consejo Agrario.

Las colonias de indígenas, que se organizarán en tierras fiscales aptas, serán orientadas técnicamente

y se instalarán en ellas escuelas de acuerdo a las preceptuadas en el artículo 34.

—Se aprueban, sin observación.

—Se lee:

Artículo 66. — El Consejo Agrario Nacional podrá en las tierras de que disponga, concertar con empresas o compañías capacitadas, la explotación temporal de bosques, sujetas a las condiciones y formas que determine en los casos que la tierra fuese necesaria a los fines de esta ley.

Sr. Landaburu. — La comisión ha aceptado la supresión del artículo 66. En su reemplazo podríamos votar, porque ésta es una ubicación adecuada, otro artículo, que también nos ha sugerido el señor senador por la Capital. Se refiere a pagos de arrendamiento con producto de la tierra. La comisión lo acepta en los siguientes términos: «Artículo 66. — Con excepción de la cuota del 10 % en efectivo, prevista en el artículo 25, el Consejo Agrario Nacional, a solicitud del interesado, está facultado para recibir en pago de las cuotas del precio de venta, del arrendamiento y del fondo de ahorro que debe abonarle el comprador o arrendatario, los productos de la tierra, materia del contrato, cotizados al precio corriente en plaza, determinado por aquél y en la forma que establezca la reglamentación de esta ley».

Sr. Palacios. — La supresión del artículo 66 que propuse y acepta la comisión, tiene verdadera importancia, pues defiende nuestros bosques; y el artículo que reemplaza al 66, que también propuse y acepta con modificaciones la comisión, beneficiará a los agricultores de pocos recursos, al permitir que las cuotas del precio de venta se perciban de los productos de la tierra.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el artículo propuesto por la comisión, en reemplazo del artículo 66, suprimido.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen los siguientes artículos del despacho.

Artículo 67. — El consejo organizará un régimen de préstamos para instalación, vivienda y habilitación, que no excederán de \$ 6.000 m/n., en cada caso y a los que tendrán opción:

- Los solicitantes comprendidos en el último apartado del artículo 27;
- Los agricultores e hijos de agrarios, preferentemente los casados, que soliciten predios en compra o en arrendamiento.

El importe será restituído por el deudor en los plazos y forma que determine la reglamentación.

El consejo no podrá invertir en estas operaciones y las del artículo 24, más del 10 % de los recursos que le acuerda esta ley.

Art. 68. — La suma total que resulte de la venta fraccionada de cada inmueble, no podrá ser inferior a su precio neto de costo, ni excederlo en más de 15 por ciento.

Art. 69. — Los predios vendidos de acuerdo con lo dispuesto por esta ley no podrán tener ninguna afectación que no sea la que corresponda a favor del Consejo Agrario Nacional, hasta tanto no se haya satisfecho íntegramente el precio, o transferido el crédito, al Banco Hipotecario Nacional.

Art. 70. — El predio vendido, las mejoras adheridas al mismo, los frutos del suelo arrendado o vendido y los elementos de trabajo de los agricultores, serán inembargables, por deudas contraídas con anterioridad a la firma del contrato de arrendamiento, con opción de compra o de compraventa. Serán también inembargables por deudas contraídas con posterioridad a la firma del respectivo contrato, la tierra, las mejoras y los elementos de trabajo del agricultor, salvo el que pudiera realizarse a los efectos del préstamo establecido en los artículos 24 y 67.

Art. 71. — El consejo cobrará el 6 % de interés por toda deuda de plazo vencido, salvo disposición expresa en contrario adoptada por aquél en cada caso.

Art. 72. — No se podrá adjudicar más de un predio a una misma persona ni a sus hijos o padres, a menos que aquéllos formen otra familia agricultora, de conformidad con lo dispuesto.

Art. 73. — Los compradores de predios quedan exonerados del pago de todo impuesto nacional que grave la propiedad raíz, por el término de diez años, a contar desde la fecha de la escrituración.

Art. 74. — El Consejo Agrario estará exento de todo impuesto en sus operaciones y el cobro de sus créditos se realizará por vía de apremio.

Las maquinarias, equipos, semillas y materiales que sea necesario importar, quedan libres de derechos de aduana.

Art. 75. — El Consejo Agrario Nacional queda autorizado para solicitar la cooperación de los gobiernos de provincia y de las municipalidades, así como la colaboración de las instituciones particulares en la acción de propaganda y divulgación de la presente ley.

—Sin observación, se aprueban.

Sr. Martínez. — El artículo solicitando la cooperación es absolutamente innecesario. La ley debe ser imperativa y no debe autorizar a solicitar lo que es un derecho para todos.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — ¿Formula el señor senador alguna observación?

Sr. Martínez. — No, señor presidente; sólo señalo un ripio. (Risas.)

Sr. Landaburu. — El señor senador debe procurar que se depure al despacho de ese ripio, porque todavía estamos a tiempo.

—Se leen los siguientes artículos:

Art. 76. — Incorpórase al Consejo Agrario Nacional, la actual Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura con todo el personal que le asigne el presupuesto vigente. La incorporación se efectuará en el momento que el Poder Ejecutivo lo considere conveniente dentro de un plazo máximo de tres años, contando desde la promulgación de esta ley. Una vez incorporada, la Dirección de Tierras dependerá en lo sucesivo del Consejo Agrario Nacional, que tendrá a su cargo el cumplimiento de las leyes números 4.167, 5.559 y 6.712.

Art. 77. — En los títulos de propiedad que otorgue el Estado deberá insertarse una cláusula especial, en la que se establezca que las tierras que enajene, no podrán formar parte del patrimonio de sociedades anónimas o de sociedades comerciales, con excepción de las cooperativas.

Los Registros de la Propiedad no anotarán transferencias de tierras de origen fiscal a favor de las mismas.

Art. 78. — El consejo estará facultado para ubicar a los arrendatarios con plazos a vencer existentes en los campos que adquiera, previa indemnización de mejoras, en lotes de superficie y condiciones agrológicas equivalentes, si la ubicación del lote que arriendan, impide efectuar el fraccionamiento racional de la tierra para su venta. Esta disposición regirá también para las instituciones oficiales de colonización de las provincias.

—Se aprueban, sin observación.

—Se lee:

Art. 79. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a las de la presente ley.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Yo pediría a la comisión que retirase el artículo 79, que se refiere a que quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Ese artículo es innecesario, desde el momento que todo el texto de la ley establece las distintas disposiciones de la misma, y, en cambio, es peligrosa esa disposición porque tratándose de una ley de excepción, las disposiciones que establecen no son compatibles con las de otras instituciones que no se refieran a colonización, que no se modifican en ninguna forma y que deben seguir rigiendo. Exagerado el argumento, mañana podría interpretarse, desde luego, equivocadamente, en un sentido contrario el propósito que ha tenido el Congreso al sancionar esta última disposición, alegándose que aquéllas han sido derogadas.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Esta ley, que no se refiere concretamente a ninguna otra, al usar la fórmula final derogatoria, sólo produce el efecto de derogar las disposiciones que son incompatibles.

Sr. Martínez. — Exactamente.

Sr. Landaburu. — Lo que manifiesta el señor senador por Córdoba es hasta cierto punto fundado, y como la comisión tiene el deseo de complacer al señor senador, acepta que se suprima el artículo 79.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar la supresión del artículo 79.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Antes de continuar, quiero hacer una indicación de orden, estando como estamos en la disposición final.

Si como consecuencia de la supresión o eliminación de algún artículo fuera necesario corregir la numeración que ellos llevan en el texto de la ley, o las referencias que hacen a otros, pido que se autorice a Secretaría para que corra con esa tarea.

—Asentimiento.

Sr. Serrey. — Lo mismo en lo que se refiere a las citas que hace un artículo a otro.

Sr. Palacios. — Esa tarea se hará de acuerdo con el presidente de la comisión.

Sr. Landaburu. — Desde luego, señor senador.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Habiendo asentimiento, así se hará.

Sr. García Fernández. — Pido la palabra.

Antes de entrar a sesión, le anuncié al señor presidente de la Comisión de Agricultura que iba a pedir una reconsideración.

Si me permito distraer la atención de los señores senadores es porque creo que en la forma que se ha sancionado la ley se ha desvirtuado, si no la totalidad de su contenido, una gran parte del mismo.

El señor senador por Entre Ríos, doctor Laurencena, propuso en la sesión de ayer, al empezar el artículo 9º, que se suprima el inciso c) y se hiciera comprender a todas las propiedades a que se refiere el artículo 8º, dentro de las condiciones que se deben llenar para la colonización y que son: que las tierras no se encuentren a mayor distancia de 30 kilómetros de camino firme, 400 kilómetros de los puertos de embarque y las demás que figuran en dicho artículo.

Yo voté con el señor senador por Entre Ríos porque me pareció atinada su observación de

que no debían destinarse a colonización tierras que no tuvieran tales condiciones; pero después, reflexionando, consideré que si el Estado tiene tierras fiscales o si las tienen los institutos oficiales, nada pierde el erario con que esas tierras pasen, aunque no reúnan aquellas condiciones, a este consejo de colonización, porque es traspasar un bien de una institución a otra dentro del mismo Estado.

Pero en lo que no puedo estar de acuerdo es que las tierras de dominio privado que se ofrezcan al consejo, no reúnan esas condiciones, y máxime ahora, cuando con la modificación que el señor senador por Jujuy, ingeniero Arrieta, ha introducido en el artículo 12, nos encontramos con que éste dice lo siguiente: «En caso de que el Consejo Agrario Nacional no pudiera adquirir tierra suficiente del origen indicado en los incisos a), b) y d) del artículo 8º, o en la forma especificada en el artículo 10, queda facultado para realizar, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo, la expropiación de la que, llenando las condiciones del artículo 9º, sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley».

Y bien, ¿qué va a suceder? Los propietarios de las mejores tierras de la República han demostrado que no están dispuestos a cederlas a la colonización voluntariamente, por lo menos en su mayor parte; entonces, el consejo recibirá numerosas ofertas de propietarios de tierras que encontrarán en él a su comprador ideal, y cuyos propietarios estarán comprendidos en el inciso d), sin llenar las condiciones de colonización que establece el artículo 9º. Y como el artículo 12 dice que el consejo no podrá expropiar ninguna tierra mientras tenga ofertas de otras que reúnan los requisitos de los incisos a), b) y d), nos encontraremos prácticamente con que las tierras buenas no serán expropiadas, porque siempre habrá ofertas superabundantes de tierras. Creo que la ley que estamos votando, tiene la finalidad de que puedan expropiarse las mejores tierras de la República para ser colonizadas y entonces, si no le damos al consejo la facultad de poder hacerlo, lo colocamos en una situación de inoperancia que hace que la ley no cumpla con su finalidad.

Por lo tanto, pido que se reconsidere el artículo 9º, y se incluya el inciso d) del artículo 8º, en su encabezamiento, para que las tierras de particulares y provincias, que se ofrezcan, reúnan las condiciones del artículo 9º.

Nada más.

Sr. Palacios. — Apoyado.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a vo-

Julio 25 de 1940

CAMARA DE SENADORES

20ª Reunión. 16ª Sesión Ordinaria

tar la moción de reconsideración formulada por el señor senador por Tucumán.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. García Fernández. — Pido que el artículo 9º, en donde dice: «Será considerado apto a los fines del inciso c) del artículo anterior», diga: «Será considerado apto a los fines de los incisos c) y d) del artículo anterior.»

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Yo había proporcionado al señor senador por Tucumán una explicación, en privado, que refleja cómo la comisión entiende el despacho que ha sido votado por el Senado.

El artículo 8º, al referirse a las tierras que servirán de base al plan de colonización, enuncia las fiscales; las que estén en poder de los ministerios, bancos oficiales o cualquiera de las instituciones autárquicas; las que el consejo adquiere por compra o expropiación, de acuerdo con la presente ley. Y, por fin, en el inciso d), del mismo artículo, las del dominio privado o de las provincias o municipalidades que «sean ofrecidas» para ser incorporadas al régimen de la presente ley.

Estas últimas tierras están, en realidad, sometidas, no diré a un régimen, sino a un procedimiento distinto de las enumeradas en los tres incisos anteriores, porque deben ser ofrecidas por las provincias o municipalidades para ser incorporadas al régimen de la ley.

Sr. García Fernández. — O por los particulares, señor senador.

Sr. Landaburu. — La comisión no tiene otro propósito que propender, por todos los medios a su alcance, a que la sanción sea clara y que no haya duda ni confusión posible cuando se trate de discutir sus alcances y sus fines. Entiende que las tierras del inciso d), deben reunir las condiciones del artículo 9º, cuando, después del ofrecimiento, se adquieren para colonizar tanto más cuanto que al votarse el artículo 15, que contiene una proposición general que el señor senador por Entre Ríos consideraba innecesaria porque estaba involucrada ya en otro artículo precedente, dije, en nombre de la comisión, que entendía que esas tierras del artículo 15 no debían, en ese caso, reunir las condiciones del artículo 9º, porque era una nueva po-

sibilidad para la expansión del plan colonizador que quería crearse a favor de las tierras que no reunieran todas y cada una de las condiciones mencionadas en el artículo 9º.

Y bien; el artículo 15 se votó y a proposición del señor senador por Córdoba, doctor Martínez, el Senado aceptó —recuerdo que por mayoría de ocho votos—, una frase complementaria, que decía que aun en el caso del artículo 15 las tierras debían reunir las condiciones del artículo 9º.

Sr. García Fernández. — Este artículo se refiere a tierras abandonadas, señor senador.

Sr. Landaburu. — Señor senador, estoy abundando en el mismo concepto que ha sostenido, al punto de expresar que no consideraría necesaria la reconsideración, aunque no me opongo a ella.

Si en el caso del artículo 15, que la comisión ha entendido que se refería a tierras exentas de las condiciones del artículo 9º, hay una votación del Senado, declarando que aun esas tierras deben llenar las condiciones del artículo 9º, con mayor motivo debe entenderse que deben reunirlas las tierras a que se refiere la disposición esencial del artículo 8º, inciso d), cuando se resuelva colonizarlas.

En consecuencia, estoy de acuerdo con la indicación del señor senador por Tucumán, en el sentido de que se modifique el artículo 9º, en la siguiente forma: «Será considerado apto a los fines de los incisos c) y d) del artículo anterior todo inmueble que...» etcétera.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar nuevamente la primera parte del artículo 9º, con la modificación propuesta por el señor senador por Tucumán y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—El artículo siguiente es de forma.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda sancionado el despacho.

Se levanta la sesión.

—Era la hora 17 y 5.

RAMÓN COLUMBA.
Director de Taquígrafos.

5

APENDICE

I

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MARTINEZ

Oncativo (Córdoba), julio 24 de 1940.

Señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

Colonos maiceros que subscriben, provincia de Córdoba, solicitan Honorable Senado de la Nación, rechace o modifique sanción Honorable Cámara Diputados sobre precio mínimo maíz y préstamo sus productores porque ello implica notoria desigualdad para maiceros situados al Norte y Oeste Villa María y Río Cuarto, cuyos fletes a puerto Buenos Aires es de trece pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional contra tres pesos con cincuenta centavos por cada tonelada de fletes automotores que soportan los de Pergamino hasta San Nicolás, resultando nuestra producción calculando promedio rendimiento en veinticinco quintales la hectárea gravada con veinticinco pesos con cuarenta centavos moneda nacional por cada hectárea. Solicitamos Honorable Senado se nos ponga en pie de perfecta igualdad todos los colonos maiceros del país, permitiéndonos señalar cualquier ley que pretenda beneficiarnos debe referirse maíz en troje cuyo valor mínimo a fijarse sería de tres pesos por cada cien kilos si se desea mantener nuestra capacidad y energías para bien República. Saludamos con nuestra mayor consideración.

Nazareno Minucci, Angel Picchio, Enrique Marizalda, José Simonetti, Nazareno Piccione, Severo Villarreal, César Bravi, José María Crozco, Pedro Delvecchio, Natalio P. Lagalle, María de Camillone, Pedro Pelagallo, José Alsina, Nazareno Montechiari, Armando Polidori, Rosa de

Troiani, Vicente Abati, José Artusso, Adolfo Piccione, Enriqueta de Severini, Felipe Bobadilli, Nazareno Ciriacci, María de Heverini, Francisco Aronne, José Ranzuglia, Virgilio Verdini, Nazareno Paracuali, Palmira de Ballini, Pacífico Parecuali, Pacífico Garparini, Lucía de Sileoni, Domingo Gallo, José Camilloni, Ferruccio Bogatto, Luis Méndez, Ana de Camilloni, Evaristo Martinello, Humberto Mozzoni, José Cruciani, Enrique Puglie, Luis Nocelli, Juan Gallo, Francisco Ranzuglia, Luis Merlini, Lorenzo Montagna, José Pittoni, Augusto Ciccioli, Eduardo Salvucci, Humberto Pistoni, José Miccrocci, Benito Delvecchio, Herminio de Palazésin, Albino Delvecchio, Benito Salvuccio, Sixto Nogueta, Antonio Salvucci, Alejandro Angeloni, Moisés Geralin, Pío Mogetti, Vicente Re, Luis Giome, Enrique Trocaili, Antonio Gogliardini, Humberto Rossini, José Scarpini, Elisa de Falcinelli, Nazareno Frezini, Luis Ripanti, Nazareno Grugnoletti, Benito Rapachiani, Enrique Grunoletti, Victorio Piersigilli, Juan Lambertucci, Angel Ferrario, Amílcar Montechiari, Domingo Malizzia, Victorio Castellano, Sucesión Tantuchi, Francisco Grangetto, Francisco Daghero, Emilio Garolini, Gaspar De Angeli, José Natalio, R. Alejandro Cristalli, Fabián Alessandrini, Serafín Ermoli, Mario Cerquatti, Gino Cittadini, Enrique Cittadini, Francisco Barbero, Juan Ochetti, Domingo Ochetti, José Barbero, Guido Giacint, Nazareno Pirchio, Nicolás Piovano, Julio Veroli, Juan Balussi, Genaro Carbajal, Humberto Carbajal, Celeste Reciale, Anibal Piccione, José Re Picea, César Ceruatti.

II

**SANCION DEL HONORABLE SENADO EN EL PROYECTO DE LEY
SOBRE COLONIZACION**

2

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

*Consejo Agrario Nacional. — Creación,
denominación y objeto*

Artículo 1º — La Nación aplicará, de acuerdo a las presentes normas, un plan agrario destinado a poblar el interior del país, a racionalizar las explotaciones rurales, a subdividir la tierra, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios.

La propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo.

Art. 2º — Para la aplicación de esta ley, créase el Consejo Agrario Nacional, que funcionará con la autonomía que ella le acuerda, con sede en la Capital Federal y con jurisdicción en todo el país.

Será una institución de derecho público y privado, siendo sus miembros, personal y solidariamente, responsables de los actos del consejo, salvo expresa constancia en acta de quien estuviera en contra de sus resoluciones.

Art. 3º — El Consejo Agrario Nacional se compondrá de cinco miembros: dos en representación del Poder Ejecutivo; uno en representación del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional; otro en representación de las cooperativas agrícolas inscriptas en el Ministerio de Agricultura conforme a la ley número 11.388; y el otro, de los consejos agrarios, locales, propuestos por éstos en la forma que determina la reglamentación de la presente ley, pudiendo serlo la primera vez por el Poder Ejecutivo, y hasta tanto dichos consejos hagan la respectiva propuesta.

Los representantes elegidos por el Poder Ejecutivo lo serán entre personas de reconocida capacidad en los problemas agrarios, debiendo la presidencia y vicepresidencia ejercerse por éstos. Todos los miembros del directorio se nombrarán con acuerdo del Senado. Serán inamovibles, salvo el caso de mala conducta. Los nombrados en caso de vacante completarán el período.

Para el funcionamiento del directorio se requiere la asistencia de cuatro de sus miembros.

El presidente y los miembros del Consejo Agrario ejercerán sus funciones por el término de seis años, renovándose éstos por mitad cada tres, y por sorteo la primera vez.

El presidente del consejo ejercerá la representación legal del mismo. Tendrá voz y voto en todos los casos, el suyo será decisivo en caso de empate.

En la organización del Consejo Agrario Nacional se dará representación a las diversas regiones del país.

Art. 4º — Tanto el presidente como los directores deberán ser ciudadanos argentinos mayores de veinticinco años de edad y tener cinco años de ejercicio de la ciudadanía en caso de ser naturalizados.

Art. 5º — La remuneración del presidente y la de los directores será fijada anualmente por la ley general de presupuesto de la Nación.

Art. 6º — No podrán ser miembros del Consejo Agrario Nacional:

- a) Los que desempeñen cualquier otra función o empleo nacional, provincial o municipal, excepto los del profesorado, y los miembros del directorio del Banco de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional, en representación de éstos, los que en tal caso sólo podrán devengar uno de los dos sueldos;
- b) Los jubilados nacionales, provinciales o municipales, salvo que renuncien a percibir la jubilación o el sueldo durante el término de su mandato;
- c) Los que formen parte del directorio o administración de bancos o entidades privadas, vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, yerbales, algodones o industrias análogas y de empresas colonizadoras;
- d) Los que se hallen en estado de quiebra, concurso civil o que tengan en gestión arreglos con sus acreedores.

CAPÍTULO II

Funciones y deberes del Consejo Agrario Nacional

Art. 7º — El Consejo Agrario Nacional tendrá las siguientes funciones y deberes:

- a) Administrar el fondo general y los bienes, arrendar y enajenar los inmuebles, así como realizar las demás operaciones vinculadas con sus fines;
- b) Estudiar planes de constitución de propiedades rurales que contemplen, metódica y progresivamente, todo el territorio de la República, teniendo en cuenta las características agrícolas de cada zona, las vías de comunicación, distancia de los mercados consumidores, estaciones y puertos de embarque y distribución de la población en el país, y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo;
- c) Convenir con los bancos oficiales e instituciones autárquicas del Estado, la incorporación al régimen de la presente ley de los inmuebles de su propiedad, o que estuvieran gravados a aquéllos, en las condiciones que se estipulen;
- d) Adquirir inmuebles del dominio privado en remates judiciales, o del Banco Hipotecario Nacional, o bancos de provincias, que por sus

- leyes orgánicas estén facultados a proceder a la subasta de las propiedades de sus deudores;
- e) Adquirir inmuebles en cualquier punto del país o proponer al Poder Ejecutivo su expropiación;
 - f) Organizar la campaña para aumentar la población rural del país, contemplando también la necesidad de trasladar a zonas agrícolas más adecuadas a los agricultores radicados en zonas menos aptas.

Celebrar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero, para radicarlos en la República mediante contratos de compraventa o de arrendamiento, con sujeción a las condiciones establecidas por esta ley. También podrá celebrar con los mismos fines, iguales convenios con empresas privadas o instituciones de reconocida solvencia y responsabilidad, dando preferencia a las entidades que no persigan fines lucrativos, y establecer relaciones con la Organización Internacional del Trabajo, e instituciones internacionales similares, a fin de convenir la mejor manera de establecer y radicar en las zonas de colonización a agricultores inmigrantes;

- g) Estudiar las condiciones de trabajo de los asalariados de la agricultura y someter a la consideración de los poderes públicos las medidas legislativas conducentes;
- h) Fomentar el cooperativismo en todas sus formas, aplicando, dentro de cada plan, las leyes del hogar, crédito agrícola, cooperativas, u otras que se dicten en el futuro, vinculadas con la economía agraria y la colonización;
- i) Propender en las distintas colonias a la formación de industrias rurales transformadoras, de acuerdo con la naturaleza de los cultivos que se realicen en aquéllas; y facilitar la aplicación y fomento del crédito agrario directo, colaborando con el Banco de la Nación Argentina;
- j) Colaborar con el Consejo Nacional de Educación y consejos provinciales para que la instrucción impartida en las escuelas rurales, se oriente hacia la formación de la capacidad técnica de los agrarios y sus hijos;
- k) Fomentar la utilización en común de las maquinarias industriales y agrícolas, a fin de obtener un mayor perfeccionamiento agrario;
- l) Procurar el aprovechamiento de las aguas superficiales para el riego de las tierras y estimular el empleo de la energía más económica y adecuada en los trabajos rurales;
- m) Promover la aplicación del seguro agrícola mutuo u oficial en las colonias que administre;
- n) Organizar en el interior y en el exterior, por intermedio de la representación diplomática y consular, una propaganda permanente destinada a difundir los propósitos de esta ley y el conocimiento de las zonas agrícolas del país;
- o) Nombrar el personal técnico y administrativo mediante concursos de selección, debiendo exigir para aquellos cargos que lo requieran, títulos expedidos por las universidades o institutos nacionales especializados, por institutos

similares extranjeros o argentinos que se hayan graduado en ellos como becados de la Nación de las provincias y en el caso de ciudadanos naturalizados graduados en el extranjero, siempre que sus títulos hayan sido revalidados en el país. Excepcionalmente podrá designar directamente técnicos extranjeros o del país, de reconocida capacidad, cuando sus actividades fueran necesarias;

- p) Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo la reglamentación de esta ley;
- q) Formular su presupuesto anual de gastos, con la aprobación del Poder Ejecutivo, el que podrá introducir modificaciones que no constituyan aumentos y ponerlo en vigencia hasta que sea considerado por el Congreso;
- r) Dictar su reglamento interno;
- s) Elevar anualmente al Congreso, por intermedio del Poder Ejecutivo, la memoria descriptiva de la actividad desarrollada.

CAPÍTULO III

Inmuebles destinados a la colonización

Art. 8º — Para los fines de esta ley se utilizarán los siguientes inmuebles:

- a) Las tierras fiscales que se consideren aptas;
- b) Las que estén en poder de los ministerios, de los bancos oficiales o cualquiera de las otras reparticiones públicas nacionales y que no se utilicen para otros fines del Estado o para los especiales que determinaron su adquisición, o que en adelante pasen a su poder o se adjudiquen en pago de sus créditos, en virtud de las leyes y reglamentos que las rigen o de convenios que celebren con sus deudores;
- c) Las que el consejo adquiera por compra o sean expropiadas de acuerdo con la presente ley;
- d) Las del dominio privado o de las provincias o municipalidades que sean ofrecidas para ser incorporadas al régimen de la presente ley.

Art. 9º — Será considerado apto a los fines de los incisos c) y d) del artículo anterior todo inmueble que:

- a) No se encuentre a mayor distancia de 30 kilómetros de estación de ferrocarril o de camino de pavimento firme o de 400 kilómetros de mercados interiores o de puertos de embarque;
- b) Sus condiciones ecológicas aseguren la explotación agrícola por el trabajo familiar en su máximo de eficiencia, dentro de prácticas aconsejadas por la técnica y la experiencia de la zona;
- c) Pueda obtenerse una adecuada rotación de los cultivos o la explotación de especies animales;
- d) El costo del transporte se encuentre en relación económica aceptable con el valor del producto;

- e) La cantidad de lluvia caída anualmente y la naturaleza del suelo sean adecuadas a la clase de cultivos para los cuales se les destina;
- f) Posea total o parcialmente riego artificial o sea posible dotarlo de él.

Sólo por razones especiales, que se expresarán en cada caso el consejo podrá resolver la adquisición de inmuebles a mayor distancia que las mencionadas y aunque no tengan todas las condiciones enumeradas en este artículo.

Art. 10. — La adquisición de las tierras se hará por licitación pública en la forma que reglamentará el Consejo Agrario Nacional, con aprobación del Poder Ejecutivo, la expropiación de la que, llenando las condiciones que se establecen por esta ley, fueran ofrecidas en esta forma.

Art. 11. — En ningún caso el Consejo Agrario Nacional podrá adquirir tierras de particulares o de instituciones privadas, en otra forma que las expresadas en el artículo 10, cuyos requisitos no regirán para cuando la compra se efectúe a instituciones del Estado.

CAPÍTULO IV

Expropiación de inmuebles para la colonización

Art. 12. — En caso de que el Consejo Agrario Nacional no pudiera adquirir tierra suficiente del origen indicado en los incisos a), b) y d) del artículo 9º o en la forma especificada en el artículo 10, queda facultado para realizar, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo, la expropiación de la que llenando las condiciones del artículo 9º, sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley. Con este objeto se declara de utilidad pública la tierra que el Consejo Agrario Nacional con la aprobación del Poder Ejecutivo juzgue preciso incluir en los planes colonizadores.

Art. 13. — La expropiación de tierras autorizada por el artículo anterior debe referirse a las que en el momento de efectuarse no fueran objeto de una explotación agraria racional verificada directamente por sus propietarios o a extensiones de tierra que excedan de dos mil hectáreas de superficie.

Art. 14. — El precio de la tierra que se expropie en cumplimiento de esta ley, que se declara de interés público, se fijará con sujeción a las siguientes normas:

- a) Al valor de valuación para el pago de los impuestos, teniendo también en cuenta la de los terrenos similares contiguos;
- b) Y al valor de su productividad apreciada en los diez años precedentes al de la expropiación dentro de la zona en que se halle ubicado.

La indemnización comprenderá, además del valor de la tierra y las mejoras cuando no estén comprendidas en los incisos anteriores, el de los perjuicios que el expropiado probare y que fueran consecuencia forzosa de la ocupación, excluyéndose en todos los casos los valores especulativos y afectivos y los daños y ganancias hipotéticas. El valor total de los perjuicios

cios en ningún caso excederá del 20 % del precio atribuido a la tierra. En todo lo demás se regirá por la ley general vigente.

Art. 15. — Todo predio rural que reúna las condiciones del artículo 9º, abandonado o no explotado por su propietario durante el término de cinco años, podrá ser expropiado por el Consejo Agrario Nacional con aprobación del Poder Ejecutivo, debiendo fijarse el monto de la indemnización conforme a las bases establecidas en el artículo precedente.

Art. 16. — Cuando el dominio de las tierras sujetas al régimen de esta ley se unifique o refunda de nuevo en un mismo propietario, o cuando se subdividan, sin contemplar las necesidades del trabajo agrícola, podrán ser expropiadas por el Consejo Agrario Nacional con aprobación del Poder Ejecutivo. El precio se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, y las mejoras deberán ser indemnizadas.

CAPÍTULO V

Inmuebles de provincia para la colonización

Art. 17. — El consejo colonizará preferentemente en las provincias que dicten leyes que dispongan:

- a) La exención de todo impuesto al consejo, por los actos que realice, contratos que celebre, sellado en actuaciones judiciales o administrativas, inscripciones y actos complementarios;
- b) La exoneración de impuestos territoriales por los inmuebles que posea el consejo, mientras permanezcan en su poder;
- c) La exoneración de los impuestos territoriales por el término de cinco años, a los adquirentes de lotes agrícolas del consejo y a todos los agricultores que, con posterioridad a la ley respectiva, adquieran tierras en extensión no mayor de cien hectáreas, que vivan en ellas con su familia y las cultiven por cuenta propia;
- d) La instalación de justicia de paz, policía y escuelas en las colonias, si no las hubiera en un radio menor de cinco kilómetros;
- e) La construcción y conservación de los caminos de acceso de las colonias a estación o puerto.

CAPÍTULO VI

Inmuebles de los bancos e instituciones oficiales y los del dominio privado de las provincias y municipalidades para la colonización.

Art. 18. — Si los considera aptos, para los fines de la presente ley, el Consejo Agrario Nacional procederá a colonizar con preferencia, juntamente con las tierras fiscales, los inmuebles adjudicados a los bancos oficiales, Instituto Movilizador, ministerios, o cualquier otra repartición pública nacional.

A este objeto podrá adquirirlas, en las condiciones de precio y de plazos para el pago, que estipulen con dichas instituciones o convenir con éstas el traspaso de los mismos a su favor, en cualquier otra forma.

Art. 19. — Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al Consejo Agrario Nacional las tierras de su propiedad que les requiera para ser colonizadas, siempre que le sea garantizado el precio que convengan, que no podrá en ningún caso ser inferior al que resulte de la aplicación de las normas del artículo 20.

Las provincias y municipalidades que entreguen al consejo las tierras de su propiedad, podrán estipular en los contratos condiciones especiales de colonización; pero el consejo no podrá, en ningún caso, comprometerse a hacerles un pago anual mayor que el ingreso que produzca la amortización e intereses de la misma tierra.

CAPÍTULO VII

Adquisición de inmuebles

Art. 20. — Previa inspección efectuada por no menos de dos técnicos de su personal, para la adquisición de inmuebles, el consejo se guiará por estas normas fundamentales:

- a) Toda adquisición será resuelta por el voto de cuatro de sus miembros, por lo menos;
- b) La tasación del inmueble se hará de acuerdo a las bases establecidas en el artículo 14.

CAPÍTULO VIII

Subdivisión y mejoras

Art. 21. — Adquirido un inmueble, el consejo procederá a subdividirlo en lotes, cuya superficie quedará subordinada a la naturaleza y topografía del terreno y deberá calcularse en cada región teniendo en cuenta que el agricultor pueda realizar la mayor parte de la labor agrícola utilizando su trabajo personal y el de su familia y con capacidad productiva suficiente para cubrir sus principales necesidades de vida y acumular un capital que le permita mejorar sus condiciones sociales y económicas y la técnica de su explotación.

Queda autorizado el consejo para vender en remate público las fracciones sobrantes de una subdivisión que no resulten aptas para los fines de esta ley, o que por sus mejoras costosas o inútiles no permitan una pequeña explotación.

Art. 22. — El consejo introducirá mejoras que estime económicamente necesarias en los predios a ofrecerse a los agricultores. Reservará las parcelas para las explotaciones de orientación técnica y experimental a que se refiere el artículo 34.

Reservará el terreno destinado a escuela, del tipo fijado en ese artículo, y convendrá con el Consejo Nacional de Educación o autoridades provinciales su instalación, donando el terreno a quien corresponda.

Art. 23. — El consejo procurará que los caminos se mantengan en buen estado, a cuyo efecto solicitará la colaboración de la Dirección Nacional de Vialidad, gobiernos de provincia o municipalidades.

El Ministerio de Agricultura facilitará sin cargo, al consejo, todos los elementos necesarios para el arbolado y embellecimiento de caminos y predios.

CAPÍTULO IX

Venta de predios

Art. 24. — El consejo estudiará tipos económicos de viviendas y podrá, previo acuerdo con el comprador, construir la casa habitación u otras mejoras cuyo importe, que se abonará en iguales condiciones que el precio de la tierra, no excederá del 10 % del valor de la misma. Si el comprador optara por un modelo más caro que el establecido por el consejo, deberá pagar al contado la diferencia de precio.

Art. 25. — El consejo podrá vender directamente el predio al agricultor que abone, por lo menos, el 10 % del precio de venta al contado, siempre que no sea propietario de inmuebles aptos para la agricultura de igual o mayor extensión que el que pretenda adquirir, y que reúna los demás requisitos prescriptos por esta ley.

Art. 26. — La venta de los predios se hará previa justificación de la capacidad civil y de la aptitud profesional y personal de los agricultores. La capacidad civil, para todos los efectos de esta ley, se adquiere a los veinte años de edad. La aptitud profesional se comprobará por su actuación en trabajos agrícolas similares, durante un periodo no menor de tres años. La aptitud personal se regirá por las condiciones que determine el reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo.

Art. 27. — Para la venta de los predios serán preferidos, en primer término, los que:

- a) Tengan familia apta para colaborar en el trabajo del predio, entendiéndose por familia la esposa, los parientes de la línea directa y los colaterales de segundo grado, que vivan con el agricultor.
- b) Sean de nacionalidad argentina, o extranjeros con residencia mayor de cinco años, y estén domiciliados en la región;
- c) Sean egresados de las escuelas de agricultura y ganadería de la Nación o provincias, o de otros establecimientos de orientación agraria, que capaciten para el trabajo especializado, siempre que cultiven la tierra directamente, y aunque no reúnan las condiciones especificadas en los incisos anteriores.

Art. 28. — El consejo adjudicará dentro de las colonias a que se refiere el artículo 34, no menos del 75 % de los predios que resulten, una vez efectuada la subdivisión, a los agricultores a que alude el artículo anterior y podrá reservar la extensión restante para adjudicarla a los que lleguen del extranjero en virtud de los convenios que menciona el inciso f) del artículo 7º.

El consejo agrario determinará el porcentaje de colonos extranjeros por nacionalidad que serán ubicados en las colonias.

Art. 29. — El saldo del precio de venta será abonado:

- a) Con una amortización anual acumulativa del $\frac{1}{2}$ % e intereses del $2\frac{1}{2}$ % hasta reducirlo al

50 %. Los vencimientos se fijarán en la fecha de mayor ingreso de explotación;

b) Con una amortización anual acumulativa e intereses iguales a los que estén en vigencia en el Banco Hipotecario Nacional, el 50 % restante;

c) La deuda será reducida en un 5 % de su valor inicial por cada hijo legítimo del comprador, que naciera en la propiedad.

Los compradores podrán en cualquier época efectuar amortizaciones extraordinarias en la forma que determine la reglamentación.

Art. 30. Cuando el saldo amortizado más el monto acumulado en el fondo de ahorro alcance al 50 % del precio de venta del predio, el consejo solicitará la transferencia de su crédito al Banco Hipotecario Nacional, recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal.

En este caso, la transferencia del dominio al comprador será simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del banco.

Si el banco no aceptara la transferencia del crédito, el Consejo Agrario Nacional podrá optar entre otorgar la escritura de venta reservándose hipoteca en garantía del saldo, o diferir la escrituración hasta que sea pagado todo el precio.

Art. 31. - Los agricultores que reúnan los requisitos exigidos y que no estén en condiciones de abonar el 10 % del precio de venta al contado, podrán arrendar los predios con opción de compra, hasta por el término de cinco años, a un precio igual al 3 % del precio de venta.

El consejo queda facultado para declarar la caducidad de dichos contratos, cuando en cualquier momento de su vigencia comprobara capacidad del arrendatario para convertirse en propietario, de acuerdo a las exigencias de esta ley.

Podrá también el consejo ampliar prudencialmente el término del arriendo cuando, por circunstancias especiales, dentro del mismo, el locatario no hubiera podido cumplir con los requisitos prescriptos para convertirse en propietario.

Art. 32. - Los agricultores que al término del contrato de arrendamiento hayan cumplido con las obligaciones impuestas por aquél y los requisitos prescriptos por esta ley, podrán adquirir el predio que trabajan, siempre que en el acto de subscribir los boletos de compraventa, abonen el 10 % del precio de venta.

En caso de que el arrendatario al final de su contrato optare por no adquirir el terreno arrendado, el fondo de ahorro a que se refiere el artículo 33, quedará como recurso del Consejo Agrario.

Art. 33. - Los compradores que no hayan pagado todo el precio o transferido el saldo de la deuda del Banco Hipotecario Nacional, no podrán enajenar sus derechos al predio sin previo consentimiento del consejo y aceptación por éste del nuevo adquirente. Los arrendatarios con opción de compra tampoco podrán, sin igual requisito, ceder sus arrendamientos o subarrendar. El consejo deberá pronunciarse dentro de treinta días de formulado el pedido correspondiente.

Toda enajenación del predio o cesión o subarriendo hecho sin consentimiento del consejo, es nulo de pleno derecho.

CAPÍTULO X

Organización de las explotaciones y normas de cultivo

Art. 34. — En cada inmueble que se subdivida en más de treinta parcelas se formará una explotación con orientación, individualidad y organización propias, con miras a la diversificación de la producción y a la implantación de industrias rurales anexas. Tendrá un consejo de agrarios, un director técnico designado por el consejo nacional y una reserva fiscal para la instalación de chacras experimentales, estaciones zootécnicas, etcétera.

El consejo estimulará y fomentará especialmente en cada colonia, la constitución y funcionamiento de sociedades cooperativas agrarias de producción, de consumo, de comercialización y de industrialización, a cuyo efecto mantendrá servicios gratuitos de información y de gestiones ante las autoridades que correspondan para su reconocimiento. Además gestionará la instalación de escuelas primarias y de finalidad agraria, las que serán orientadas hacia una enseñanza que se adapte al medio rural y costeadas por el Consejo Nacional de Educación, pudiendo, a los fines de la misma, recabar la colaboración de los técnicos del Ministerio de Agricultura o hacerlo por intermedio de los que tuviere en las colonias.

Art. 35. — Los agrarios, mientras no hayan pagado todo el precio, estarán obligados a seguir las normas de cultivo y explotación que les sean indicadas por el consejo o sus representantes especialmente autorizados.

CAPÍTULO XI

Consejos agrarios

Art. 36. — El Consejo Agrario Nacional procederá a instituir en las colonias oficiales y en las distintas zonas del país, donde sea necesario y en el número que juzgue preciso para orientar las explotaciones agrarias, racionalizar la producción y tutelar los intereses de los trabajadores agrarios, consejos agrarios que estarán formados por tres miembros que desempeñarán sus cargos ad honorem.

Los miembros de los consejos agrarios serán elegidos por el Consejo Agrario Nacional, entre los mejores productores de la zona en que se creen, ejerciendo la presidencia el gerente del Banco de la Nación, el agrónomo regional o el presidente de la cooperativa, en caso de existir en la zona donde se establezcan, o en su defecto el productor que el Consejo Agrario Nacional determine.

Art. 37. — Los consejos agrarios tendrán las siguientes funciones:

- 1ª Coadyuvar con la acción del Ministerio de Agricultura en todo lo relativo a la orientación y racionalización de la producción ganadera y agrícola, a la sanidad vegetal y a la organi-

- zación de la industrialización y del comercio de los productos agropecuarios;
- 2ª Colaborar en la forma que reglamentará el Consejo Agrario Nacional, con este, en la acción que debe desarrollar para la ejecución de la presente ley y de la reglamentación de la misma;
 - 3ª Colaborar con la Sección de Crédito Agrario del Banco de la Nación Argentina para facilitar la canalización del crédito agrario a los pequeños agricultores y ganaderos;
 - 4ª Actuar como delegados del Ministerio de Agricultura en la acción que éste desarrolla para combatir y extinguir las distintas plagas de la agricultura;
 - 5ª Intervenir en calidad de amigables componedores en los conflictos que se suscitaren con motivo del trabajo de los productores agropecuarios y representarlos en sus gestiones ante el Ministerio de Agricultura y los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales;
 - 6ª Fomentar con una propaganda permanente y eficaz la organización de cooperativas de producción, de comercialización y de consumo.

CAPÍTULO XII

Fondos de ahorro

Art. 38. — Todo comprador, después de abonar el interés por el saldo de precio y su amortización, de acuerdo con el artículo 29, y todo arrendatario después de abonar el precio de su arrendamiento, de conformidad con el artículo 31, deberá abonar, además, una suma variable, para constituir el «fondo de ahorro», cuyo monto anualmente no podrá exceder del 4 % del precio de venta.

Art. 39. — El consejo fijará anualmente y en cada región, el monto de las sumas que los propietarios o arrendatarios deberán ingresar en el «fondo de ahorro». Si los resultados de la explotación anual del predio no permitieran, a juicio del consejo, el cobro de esas sumas, podrá exonerarlos de su pago.

Art. 40. — Las sumas que se abonen en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 se depositarán en el Banco de la Nación Argentina a nombre del comprador o arrendatario y a la orden del consejo, colocadas en títulos nacionales. Los intereses de estas sumas tendrán el mismo destino.

Art. 41. — El «fondo de ahorro» se destinará para:

- a) Aumentar el fondo de amortización para saldar el precio del predio adquirido, en la forma que el consejo determine;
- b) Reunir la cantidad necesaria para adquirir el predio arrendado;
- c) Servir como fondo de reserva para las contingencias agrícolas, mientras no se haya instituido el seguro agrario.

Solamente cuando el «fondo de ahorro», alcance al 10 % de precio de venta, el excedente se destinará a amortizar su saldo.

Art. 42. — Si el agricultor no pudiese abonar el saldo del precio de venta o de arrendamiento en las

condiciones establecidas e invocare el caso de fuerza mayor, como causa de pérdida de sus cosechas, el consejo podrá hacer uso de las sumas destinadas a «fondo de ahorro», para el pago de las anualidades a que se refiere el artículo 29.

El consejo, por unanimidad, podrá suspender transitoriamente el pago total o parcial de los servicios de amortización e intereses de la deuda contraída por los compradores de predios, así como la proveniente por precio de arrendamiento, teniendo en cuenta los antecedentes de cada caso y siempre que no haya saldo disponible en el «fondo de ahorro».

Art. 43. — Una vez efectuada la transferencia a que se refiere el artículo 30, cesará la obligación del comprador de contribuir a formar el «fondo de ahorro».

CAPÍTULO XIII

Rescisión de contratos

Art. 44. — Todo contrato podrá ser rescindido, si el agricultor:

- a) No reside en el predio con su familia y no lo trabaja;
- b) Deja de pagar una anualidad parcial o totalmente, siempre que esa falta de pago no fuera imputable, a juicio del consejo, a causa de fuerza mayor;
- c) No cumpla con cualquiera de las otras disposiciones de esta ley, o del contrato de compraventa, o de arrendamiento con opción de compra.

Art. 45. — Siempre que no sea por falta de pago, toda resolución del consejo que declare rescindido un contrato, deberá ser adoptada por lo menos por cuatro de sus miembros y comunicada en la época que determine el contrato; la notificación se hará por intermedio del juez de paz del lugar. El comprador tendrá un plazo mínimo de seis meses para desalojar, y el arrendatario un plazo mínimo de sesenta días, previo informe del consejo local.

Art. 46. — Queda facultado el consejo a proceder sin forma alguna de juicio, al embargo hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio para aplicarla al pago de las anualidades a que se refieren los artículos 29 y 31. Los embargos se anotarán en el Registro Agrícola Ganadero de la Nación (ley número 9.644).

Art. 47. — En caso de fallecimiento del comprador, el consejo podrá hacer uso del derecho de rescisión, y ceder nuevamente el predio a alguno de los herederos que considere capaz de continuar la explotación agraria, o a un tercero si no hubiere herederos en esas condiciones. En este caso, depositará a la orden del juez y a nombre de la sucesión el monto de las amortizaciones y el valor estimado de las mejoras, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

Art. 48. — En caso de fallecimiento del arrendatario con opción de compra, queda facultado el consejo para rescindir el contrato. Para una nueva adquisición del predio, deberá preferir a la viuda del locatario o a uno de sus hijos mayor de edad. Declarada la caducidad de la promesa de venta por fallecimiento y no adjudicado el predio a un heredero, el consejo fijará una indemnización por las mejoras efec-

tuadas, de acuerdo a lo dispuesto por esta ley, cuyo importe depositará a la orden de la sucesión respectiva.

CAPÍTULO XIV

Indemnización de mejoras

Art. 49. — El consejo al declarar rescindido el contrato devolverá lo amortizado, deduciendo lo necesario a fin de que resulte abonado el 3 % del valor de la venta como arriendo anual durante el tiempo que ocupó el lote, e indemnizará las mejoras en el estado en que se encuentren al recibir la posesión del predio, siempre que no haya sufrido deterioro imputable al agricultor con motivo del desalojo.

Art. 50. — El justiprecio de las mejoras y el monto de la indemnización serán fijados por el consejo, previo asesoramiento del consejo agrario local y audiencia del interesado

CAPÍTULO XV

Colonización granjera

Art. 51. — El Consejo Agrario Nacional estudiará e implantará en las regiones del país que crea conveniente, un plan de colonización granjera, de tipo familiar.

Art. 52. — Las tierras para colonización granjera se dividirán y venderán en parcelas no mayores de cincuenta hectáreas y se destinarán, además de los distintos cultivos y cuidado de animales de labor, a avicultura, apicultura, cría de conejos, cerdos, mantenimiento de vacas lecheras y demás industrias granjeras y transformadoras de sus productos.

Art. 53. — Cuando exista un número suficiente de explotaciones granjeras, a juicio del Consejo Agrario Nacional, se constituirán consejos granjeros locales, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo XI de esta ley; y cuando a juicio del Ministerio de Agricultura, hubiera en el país un número suficiente de consejos granjeros locales, éstos tendrán los mismos derechos que los consejos agrarios para estar representados e integrar, indistintamente, el Consejo Agrario Nacional.

En todo lo demás la colonización granjera se regirá por las prescripciones de esta ley sobre colonización agrícola.

CAPÍTULO XVI

Colonización ejidal

Art. 54. — El Consejo Agrario Nacional propenderá al parcelamiento y formación de pequeñas explotaciones agrarias intensivas en los ejidos de las ciudades y villas, conviniendo con las respectivas comunas la forma de realizar la tarea.

Art. 55. — Las explotaciones ejidales se ajustarán a las normas generales establecidas para las rurales, debiendo tender a formar especialmente pequeñas quintas y granjas. En cada ejido con más de treinta parcelas se organizará una cooperativa y un consejo agrario.

Art. 56. — En tierras cercanas a las ciudades, el consejo propenderá especialmente a la formación de colonias de tamberos, con la organización establecida en la presente ley.

CAPÍTULO XVII

Colonización privada

Art. 57. — Los propietarios que destinen inmuebles a la colonización y acepten las normas que dicte el consejo con aprobación del Poder Ejecutivo, quedan eximidos por el término de cinco años y por la extensión colonizada del impuesto territorial desde la fecha en que se extiendan a favor de los colonos respectivos, contrato de venta. Quedan, también, exentos de todo impuesto de sellado y derecho de inscripción.

Art. 58. — El consejo gestionará de los gobiernos de provincia la exención del impuesto territorial para los inmuebles a que se refiere el artículo anterior.

Art. 59. — El Consejo Agrario Nacional podrá aceptar inmuebles privados que encuadren dentro de las condiciones que esta ley establece, para colonizarlos dentro de las normas de la misma, cobrando únicamente los gastos que por tal concepto se realicen y acreditando los beneficios que por ese hecho resultaren.

El consejo inspeccionará las colonias particulares del país, sean de propietarios o arrendatarios, fomentando la buena colonización y difundiendo la cultura agraria en todos sus aspectos.

CAPÍTULO XVIII

Recursos del consejo

Art. 60. — El Consejo Agrario Nacional dispondrá de los siguientes recursos:

- a) Hasta la cantidad de \$ 30.000.000 m/n. que el Poder Ejecutivo entregará con imputación a esta ley, dentro de los noventa días de promulgada, provenientes de rentas generales o del producido del fondo de beneficios de cambio, o de una operación de crédito interno o externo, pudiendo usarse de los tres medios a la vez;
- b) Hasta la cantidad de \$ 70.000.000 m/n., que el Poder Ejecutivo desde el año siguiente a la promulgación de esta ley entregará anualmente en cuotas de \$ 10.000.000 m/n., o su equivalente en títulos externos o internos;
- c) El producido de la venta y arrendamientos de las tierras regidas por la presente ley;
- d) Los fondos que se recauden en virtud de lo dispuesto por las leyes números 4.167, 5.559 y 6.712 y sus reglamentaciones vigentes;
- e) El producido de las comisiones, de los intereses punitivos, derechos de inspección, etcétera, que fije el consejo, y de los legados, donaciones, etcétera, que se le hagan. Estos fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina a la orden del consejo.

Art. 61. — Mientras no se empleen en los destinos previstos por esta ley, los recursos a que se refiere el artículo anterior, el consejo podrá invertirlos hasta un 90 % en títulos nacionales. Los intereses que devenguen estos títulos formarán parte de los recursos del consejo.

Art. 62. — El Consejo Agrario Nacional, a solicitud del interesado, recibirá en pago del impuesto hereditario sobre bienes de jurisdicción nacional, que en ese caso se declaren fondos de colonización, tierras que reúnan las condiciones del artículo 9º, siempre que la porción o lote exceda de quinientas hectáreas y se entregue por la valuación fiscal para el pago del impuesto territorial.

CAPÍTULO XIX

Disposiciones generales

Art. 63. — El Consejo Agrario Nacional, sin perjuicio de las demás disposiciones de la ley número 4167, podrá dar en arrendamiento vitalicio las tierras fiscales, que no entren en el plan de colonización regido por las disposiciones anteriores, por el precio fijo o movable y en las condiciones que determine la reglamentación que deberá dictar al efecto con aprobación del Poder Ejecutivo. El locatario estará obligado a vivir en la tierra arrendada y a trabajarla y tendrá derecho para cobrar al final del contrato las mejoras necesarias y útiles que hubiera realizado, siempre que aquél no termine por causa que le sea imputable. El contrato es intransferible, pero los herederos del locatario tendrán derecho preferente para ocupar la tierra al mismo título. El locatario sólo podrá ceder el arrendamiento, con previa autorización del Consejo Agrario.

Art. 64. — Las tierras situadas en las fronteras del país, comprendidas en una faja de veinte a ciento cincuenta kilómetros de la línea internacional según su ubicación y territorio, se destinarán a la formación de colonias agrarias pobladas con familias de ciudadanos nativos. A este efecto decláranse de utilidad pública las que se encuentren en poder de particulares, las provincias o municipalidades. Al efectuar las adjudicaciones de estas tierras el Consejo Agrario Nacional deberá proceder previo informe del Ministerio de Guerra.

Art. 65. — Los colonos a que se refieren los artículos 45, 51, 52 y 53 de la ley número 12367 tendrán derecho a los beneficios que se otorgan en esta ley a los arrendatarios o compradores de predios, quedando bajo el control del Consejo Agrario, conforme a la reglamentación que dicte de acuerdo con la Dirección General de Gendarmería Nacional. Las colonias serán organizadas con sujeción a las bases de esta ley.

Art. 66. — El Consejo Agrario acordará tierras en propiedad, en los territorios nacionales, a los indígenas del país y establecerá el régimen de explotación de las mismas, teniendo en cuenta sus costumbres y métodos de trabajo. Las tierras que se les adjudique no podrán ser vendidas, gravadas, ni embargadas, sin el consentimiento del Consejo Agrario.

Las colonias de indígenas, que se organizarán en tierras fiscales aptas serán orientadas técnicamente y se instalarán en ellas escuelas de acuerdo a las preceptuadas en el artículo 34.

Art. 67. — Con excepción de la cuota del 10 % en efectivo prevista en el artículo 25 el Consejo Agrario Nacional, a solicitud del interesado, está facultado para recibir en pago de las cuotas del precio de venta, del arrendamiento y del fondo de ahorro que debe abonarle el comprador o arrendatario, los productos de la tierra materia del contrato, cotizados al precio corriente en plaza, determinado por aquél y en la forma que establezca la reglamentación de esta ley.

Art. 68. — El consejo organizará un régimen de préstamos para instalación, vivienda y habilitación, que no excederán de \$ 6.000 m/n., en cada caso y a los que tendrán opción:

- a) Los solicitantes comprendidos en el último apartado del artículo 27;
- b) Los agricultores e hijos de agrarios, preferentemente los casados, que soliciten predios en compra o en arrendamiento.

El importe será restituído por el deudor en los plazos y forma que determine la reglamentación.

El consejo no podrá invertir en estas operaciones y las del artículo 24 más del 10 % de los recursos que le acuerda esta ley.

Art. 69. — La suma total que resulte de la venta fraccionada de cada inmueble, no podrá ser inferior a su precio neto de costo, ni excederlo en más del 15 por ciento.

Art. 70. — Los predios vendidos de acuerdo con lo dispuesto por esta ley no podrán tener ninguna afectación que no sea la que corresponda a favor del Consejo Agrario Nacional, hasta tanto no se haya satisfecho íntegramente el precio, o transferido el crédito, al Banco Hipotecario Nacional.

Art. 71. — El predio vendido, las mejoras adheridas al mismo, los frutos del suelo arrendado o vendido y los elementos de trabajo de los agricultores, serán inembargables, por deudas contraídas con anterioridad a la firma del contrato de arrendamiento, con opción de compra o de compraventa. Serán también inembargables por deudas contraídas con posterioridad a la firma del respectivo contrato, la tierra, las mejoras y los elementos de trabajo del agricultor, salvo el que pudiera realizarse a los efectos del préstamo establecido en los artículos 24 y 68.

Art. 72. — El consejo cobrará el 6 % de interés por toda deuda de plazo vencido, salvo disposición expresa en contrato adoptada por aquél en cada caso.

Art. 73. — No se podrá adjudicar más de un predio a una misma persona ni a sus hijos o padres, a menos que aquéllos formen otra familia agricultora, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y lo que establezca su reglamentación.

Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo anterior, toda persona que tenga cuatro hijos varones que vivan y trabajen con ella, en cuyo caso podrá adquirir tantos predios como veces reúna este requisito.

Art. 74. — Los compradores de predios quedan exonerados del pago de todo impuesto nacional que grave la propiedad raíz, por el término de diez años, a contar desde la fecha de la escrituración.

Art. 75. — El Consejo Agrario estará exento de todo impuesto en sus operaciones y el cobro de sus créditos se realizará por vía de apremio.

Las maquinarias, equipos, semillas y materiales que sea necesario importar, quedan libres de derechos de aduana.

Art. 76. — El Consejo Agrario Nacional queda autorizado para solicitar la cooperación de los gobiernos de provincia y de las municipalidades, así como la colaboración de las instituciones particulares en la acción de propaganda y divulgación de la presente ley.

Art. 77. — Incorpórase al Consejo Agrario Nacional, la actual Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura con todo el personal que le asigne el presupuesto vigente. La incorporación se efectuará en el momento que el Poder Ejecutivo lo considere conveniente dentro de un plazo máximo de tres años, contando desde la promulgación de esta ley. Una vez incorporada, la Dirección de Tierras dependerá en lo sucesivo del Consejo Agrario Nacional, que tendrá a su cargo el cumplimiento de las leyes números 4.167, 5.559 y 6.712.

Art. 78. — En los títulos de propiedad que otorgue el Estado deberá insertarse una cláusula especial, en la que se establezca que las tierras que enajene, no podrán formar parte del patrimonio de sociedades anónimas o de sociedades comerciales, con excepción de las cooperativas.

Los registros de la propiedad no anotarán transferencias de tierras de origen fiscal a favor de las mismas.

Art. 79. — El consejo estará facultado para ubicar a los arrendatarios con plazos a vencer existentes en los campos que adquiera, previa indemnización de mejoras, en lotes de superficie y condiciones agrológicas equivalentes, si la ubicación del lote que arriendan, impide efectuar el fraccionamiento racional de la tierra para su venta. Esta disposición regirá también para los institutos oficiales de colonización de las provincias.

Art. 80. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.